



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

“Criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016”

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTORA:

María Elena Ordinola Rodríguez

ASESOR:

Dr. Pedro Pablo Santisteban Llontop

LINEA DE INVESTIGACION:

Derecho Penal

LIMA-PERU

2017

Página del jurado

Elías Gilberto Chávez Rodríguez
Presidente

Oscar Melanio Dávila Rojas
Secretario

Pedro Pablo Santisteban Llontop
Vocal

Dedicatoria:

Dedico este trabajo de investigación a Dios, a mi linda familia, en especial a mi madre, que me ha dado la vida y a mi hermana Shirley, que me ha dado la fortaleza para terminar este proyecto de investigación con mucho amor y cariño les dedico todo mi esfuerzo y trabajo de investigación.

Agradecimiento:

Agradezco a mi asesor de tesis Dr. Pedro Santisteban Llontop, por su paciencia, dedicación, conocimientos, y motivación. Inculcándome valores y rigor académico, así a los demás doctores de la plana docente y compañeros de esta casa de estudios por su incondicional colaboración, quienes me guiaron para la elaboración de la presente investigación.

Declaración jurada de autenticidad

Yo, María Elena Ordinola Rodríguez, identificada con DNI N° 42306536, a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes o actuales consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que:

1. La presente tesis es de mi autoría o creación.
2. He considerado o respetado las normas internacionales de cita y referencias bibliográficas de las fuentes consultadas, por lo tanto, la presente tesis no ha sido plagiada ni totalmente ni parcialmente.
3. La presente tesis no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicada, ni difundida, ni mostrada con anterioridad para obtener cualquier grado o título profesional.
4. Los datos y resultados son ciertos; no son falsos, ni ficticios, ni duplicados, ni copiados. En ese contexto, los resultados o conclusiones constituirán en la aportación o contribución de la realidad o fenómeno de estudio.

Por lo tanto, de identificarse o determinarse falsedad, plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo o acepto la responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar, en sujeción a los preceptos contenidas en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, julio de 2017

María Elena Ordinola Rodríguez
DNI N° 42306536

Presentación

Señores miembros del jurado:

El presente tema de investigación titulada **“Criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016”**, la misma que se pone a vuestra consideración con el propósito de establecer criterios judiciales en la determinación del peligro de fuga al momento de aplicar la medida de prisión preventiva, en concordancia con los criterios ya establecidos en normas supranacionales como a nivel nacional, pues el presente tema de investigación es de vital importancia ya que en la práctica judicial hay diversidades de criterios en relación al determinar el presupuesto del peligro de fuga, ya que la norma penal solo lo enumera y no lo desarrolla dando lugar a criterios de discrecionalidad a los magistrados que muchas veces estas pueden subjetivos o arbitrarios, vulnerándose así derechos fundamentales de los procesados.

Que, en cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, la investigación se ha elaborado en tres capítulos, que el primer capítulo: está conformada por la introducción en la cual se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o arco teórico y la formulación del problema, la misma que establece el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos tanto generales como específicos; El segundo capítulo: conformada por el marco metodológico que argumenta el trabajo de investigación como una investigación desarrollada con un enfoque cualitativo, tipo de estudio básico orientado a la comprensión a la luz del diseño de las entrevistas, análisis de casos, análisis jurisprudencial y normativo; Finalmente el tercer capítulo: se muestran los resultados, conclusiones y recomendaciones en relación al presente tema de investigación, todo ello con respaldo bibliográfico y de las evidencias contenidas en el anexo del presente tema de investigación, la cual someto a vuestra atención y esperando cumplir con los requisitos de consenso para obtener el título profesional de abogada.

La autora.

INDICE

Página del jurado	ii
Dedicatoria:	iii
Agradecimiento:	iv
Declaración jurada de autenticidad	v
Presentación	vi
INDICE	vii
RESUMEN	
ixi	
ABSTRACT	x
I.- INTRODUCCIÓN	xi
Aproximación temática	2
Trabajos previos	6
Teorías relacionadas al tema	10
Formulación del problema	34
Justificación del estudio	34
Objetivos	36
II. METODO	39
2.1 Tipo de investigación	40
2.2 Diseño de investigación	40
2.3 caracterización de sujetos	41
2.4 Población y muestra	42
2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad	42
Técnicas	42
Instrumentos	44
2.6 Método de análisis de datos	45

2.7 unidad de análisis: categorización	46
2.8 Aspectos éticos	47
III. RESULTADOS	48
IV. DISCUSION	62
V. CONCLUSION	71
VI. RECOMENDACION	74
VII. REFERENCIAS	76
ANEXOS	83
ANEXO 01: Matriz de consistencia	84
ANEXO 02: Instrumentos	86
ANEXO 2-A: Entrevista al Fiscal William Manuel Martell Aguilar	86
ANEXO 2-B: Entrevista al Fiscal Gary Martin Rojas Auqui	90
ANEXO 2-C: Entrevista al Fiscal Adj. Ronald Nicolás Chafloque Chávez	94
ANEXO 2-D: Entrevista a Fredy Ramírez Bailón	98
ANEXO 2-E: Entrevista a Juan Fernández Pacherre	102
ANEXO 2-F: Entrevista a Segundo Lujan Mendoza	106
ANEXO 2-G: Entrevista a Ricardo Francisco Cervera Lengua	110
ANEXO 2-H: Entrevista a Luis Alfredo Peceros Quesada.	114
ANEXO 2-I: Guía de Entrevista	118
ANEXO 2-J: Guía de Análisis Jurisprudencial	121
ANEXO 2-K: Guía de Análisis Normativo	124
ANEXO 2-L: Guía de Análisis de Casos	125
ANEXO 03: Validación de Instrumentos	135

RESUMEN

La relevancia jurídica del presente trabajo de investigación, se destaca en establecer “Criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva del Distrito Judicial de Lima Norte.2016”, ya que en la práctica judicial existen distintos criterios por parte de los magistrados, asimismo establecer algunos criterios brindados tanto por la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, en esa misma línea ayudar a conocerlos para mejorar la práctica judicial. Para ello emplearemos un tipo de investigación cualitativa, y como instrumento se utilizara las entrevistas a profesionales de derecho como: Fiscales, Asistentes de Función Fiscal y Abogados expertos en materia Penal, del distrito judicial de Lima Norte, asimismo el análisis de expedientes de 08 autos de prisión preventiva de la audiencias realizadas en el Juzgado de Turno Permanente de Lima Norte del año 2016, con la finalidad de poner en conocimiento al lector una serie de criterios judiciales respecto del tema objeto de investigación aproximadas a la práctica real y su importancia de poder instaurar cambios en la administración de justicia de nuestro país.

Palabras Claves: Prisión preventiva, peligro de fuga, libertad personal, test de proporcionalidad, debida motivación, presunción de inocencia.

ABSTRACT

The legal relevance of this research work is highlighted in establishing "Criteria of the judge when evaluating the budget of flight risk to determine the preventive detention of the Judicial District of Lima Norte.2016", since in judicial practice there are different criteria for part of the magistrates, also establish some criteria provided by the national and international doctrine and jurisprudence, along the same line help to know them to improve judicial practice. For this we will use a type of qualitative research, and as an instrument we will use interviews with legal professionals such as: Prosecutors, Fiscal Function Assistants and Expert Criminal Lawyers, from the judicial district of Lima Norte, as well as the analysis of 08 car records of preventive custody of the hearings held in the Permanent Court of Lima North of 2016, in order to inform the reader a series of judicial criteria regarding the subject matter of investigation approximated to the actual practice and its importance of power establish changes in the administration of justice in our country.

Key words: Preventive prison, danger of flight, personal freedom, proportionality test, due motivation, presumption of innocence.

I.- INTRODUCCIÓN

Aproximación temática

En el marco de la Jurisprudencia Internacional, se han establecido pactos, tratados, protocolos como: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), más adelante (PIDCP o El Pacto); La Comisión Europea de Derechos Humanos, en los siguiente (CEDH o La Comisión;) La Corte Europea de Derechos Humanos, más adelante (TEDH); y el Estatuto o Reglamento de Roma entre otras. Todos ellos en relación a la utilización de la medida cautelar de prisión preventiva.

La jurisprudencia internacional ha establecido que la institución de prisión preventiva, es la medida cautelar que restringe la libertad personal del imputado, que está siendo investigado por un presunto hecho delictivo, sin sentencia condenatoria, la misma que es considerada como la más riesgosa que puede adoptar un ordenamiento jurídico y que su utilización debe de última ratio y no la regla general.

En Latinoamérica, según el informe efectuado por CIDH; se analizó lo siguiente: que la utilización de este precepto legal, en los últimos quince años viene siendo un problema crónico su uso excesivo, con preocupación en la atención y resguardo de los derechos fundamentales de los procesados, pues su uso viene ocasionado un gran acrecentamiento o incremento de la población penitenciaria, provocando una disfuncionalidad del régimen de justicia penal (Informe Corte IDH, 2013, p. 18).

Es decir, las condiciones inaceptables de hacinamiento o sobre poblamiento en las cárceles entre los procesados y condenados o sentenciados, asimismo de los 15 países de Latinoamérica, el 65 % hacen uso excesivo de esta medida, por ejemplo el estado Boliviano, reporta mayor índices de la utilización de la prisión preventiva y a ello también se suma el Perú, (Informe CIDH, 2013, p. 18).

Se ha detectado deficiencias orgánicas o estructurales de los órganos de justicia penal, como son los diversos criterios o fórmulas legales que utiliza el legislador

para la determinación del peligro de fuga, acerca del arraigo del procesado, la gravedad del hecho delictivo, la probabilidad de una pena, u obstaculización de fuentes o medios de prueba (Informe Corte IDH, 2013, p. 40).

En ese sentido la CIDH, es concordante, con CEDH, fijando que el peligro de fuga, no debe emplearse como criterio rector, por una sola sospecha, o indicios que no son suficientes para cumplir el requisito que configure el peligro procesal.

Según el informe los problemas críticos es la carencia de idoneidad operante de los magistrados, el procedimiento de los agentes policiales, agentes de investigación, la escasez de independencia, infraestructura de las defensorías públicas, y la influencia de la presión mediática o por miedo a ser inhabilitados o (Informe CIDH, 2013, p. 41).

Por su parte la Comisión, ha establecido recomendaciones a los países de Latinoamérica, fomentándose medidas correctivas del rezago procesal y el fortaleciendo los sistemas de justicia; implementando una estricta fundamentación sobre los criterios de valoración acerca del peligro o riesgo de fuga, y la ejecución del tiempo máximo legal de aquella medida.

El Tribunal Constitucional más adelante TC, en su disposición determina que es la restricción del derecho a la libertad personal, que el amparo de esta subyace la validez de otras libertades, es por ello la excepcionalidad de esta medida, y no la regla general (Exp. N° 3357-2003–HC/TC).

Es decir que su utilización debe realizarse en cuanto a su finalidad que persigue netamente de aseguramiento procesal y no verse como una pena anticipada.

En ese sentido esta medida debe determinarse a partir de un análisis de los presupuestos en conjunto y las circunstancias tanto al inicio y durante del proceso, las mismas que estén vinculadas con la conducta y moralidad del acusado, su actividad, posesiones, lazos familiares, etc. concluyéndose en un alto grado de objetividad (Expediente N° 01555-2012-PHC/TC).

El Instituto Nacional Penitenciario INPE, refiere que existe un incremento 4% de la población penitenciaria durante 2015, que, si el hacinamiento carcelario supera más del 20% de su capacidad, En la ciudad de Jaén se destaca en primer lugar porque existe un sobre poblamiento de 534%; En cambio el establecimiento carcelario de damas de la Concepción, siendo un espacio para 60 reclusos que a la fecha es habitado por 8 reclusos.

La situación jurídica, es otra variable porque a la fecha hay 49,84% procesados y condenados el 50,16% en relación al total del poblamiento carcelario (Informe estadístico penitenciario, 2015, pp. 4-10).

La crítica es sin duda la disfuncionalidad del régimen de justicia, y una realidad preocupante, es decir que existe la advertencia de una sobrepoblación o sobre poblamiento carcelario, que ante ello reprochamos ya que consideramos que es un maltrato inhumano para los internos.

La Defensoría del Pueblo, hace referencia al análisis del C.E.J.A, que fueron un integro de 112 audiencias desarrolladas, en siete distritos judiciales como: Arequipa, Cusco, Huara, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tacna; donde advierte el uso indiscriminado de este precepto legal por parte de los jueces, en base a la valoración del peligro de fuga u obstaculización de las fuentes de prueba (Informe N° 154/2011/DP, 2011, pp. 189-190).

Es decir que urge la aplicación de una metodología distinta a esta y no de una reforma procesal.

En un estudio financiero realizado en el Perú en el 2011, se calculó el coste habitual para el país, al sostener a un preso en prisión preventiva, obteniendo como costo cotidiano de S/ 22.000 soles, que sustentar a los moradores carcelarios de 34,508 encausados por prisión preventiva, el importe habitual es: S/. 759,176 Soles, equivalentes a \$.271, 134 en moneda extranjera, representando anualmente en un gasto total de S/. 277. 099. 240 Soles.

Por otro lado, el gasto colectivo, es: S/. 51.4 soles se calcula de un universo de residentes carcelarios de 34,508 el coste habitual es de S/. 1, 773,711 N/S y de \$ 633,468 en moneda extranjera, anualmente es de S/. 647, 404,515 N/S y de \$ 231, 215,898 en moneda extranjera. Recayendo lo gastos al Estado, a los presos y familiares (Informe CIDH, 2013, p. 54).

Consideramos que el uso excesivo de esta institución, viene siendo un dilema en distintos países de Latinoamérica, como el Perú, que a pesar de la vigencia del Código Procesal Penal de 2004, más adelante CPP, existen datos indicativos de su realidad, por diversas técnicas interpretativas que utilizan los operadores de justicia, y el uso desmedido de esta institución, causa problemas en atención a los derechos fundamentales, como también al sobre poblamiento en las cárceles pues estas generan gastos económicos, sociales, familiares, etc.

Consideramos que este instrumento legal, es el más delicado, porque restringe derechos o libertades de los imputados en un proceso penal, es por ello la importancia del presente objeto de estudio titulado “Criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016”.

El propósito de la presente investigación es presentar una visión panorámica, de la práctica judicial en relación a los criterios que utiliza el juez para evaluar el presupuesto del peligro fuga para determinar la prisión preventiva, con la finalidad de poner en conocimiento al lector una serie de reflexiones aproximadas de su práctica real y su importancia de implementar cambios en la administración de justicia en nuestro país.

Trabajos previos

Valderrama (2015) señala que son estudios realizados por otros autores en años anteriores, con vinculación directa con el trabajo de investigación, de preferencia con una antigüedad de 05 años, estas se encuentran en bibliotecas, repositorios, artículos científicos, tesis, etc. los mismos deben guardar relación con las variables para mayor soporte a la formulación de los supuestos (p. 142).

Es decir que son todos los trabajos de investigación preexistente al nuestro y que están relacionados con los objetivos del tema de investigación, para ello es indispensable dar a conocer los diferentes trabajos presentados anteriormente por distintos autores en relación a la presente investigación, en ese sentido a continuación presentaremos los siguientes:

Trabajos previos nacionales

Muñoz (2016) en su tesis titulada “Valoración del arraigo en la prisión preventiva en los delitos de robo agravado por los juzgados penales del distrito de Lima Norte 2015” sustentada en la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogado mencionó que la prisión preventiva, es la medida la más excesiva de una sistema de justicia, basada en presupuestos de peligro procesal, pero dentro de ellos, el más delicado son la valoración de los arraigos tanto familiar, de domicilio y laboral, siendo necesarios que el procesado demuestre o acredite un lugar de permanencia y que este se encuentre vinculado siempre en función a personas y cosas.

La realidad peruana es la demostración del arraigo laboral, requiriendo una exhaustiva valoración entre un trabajador formal e informal y los instrumentos y tiempos para su actuación, incidiendo en una rigurosa evaluación del peligro del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

Pérez (2014) menciona que los presupuestos del peligro de fuga se fundamentan en los arraigos según el vínculo familiar del imputado, sus dependientes en

territorio nacional o en el extranjero, asimismo su incidencia económica, del cuantun o gravedad de la pena a imponerse, su valoración de ser analizada en razón a varios elementos, incluso valores morales por encontrarse en ámbitos de discrecionalidad.

Si estos se fundan en criterios penológicos se estarían entrando en ámbitos de culpabilidad, recomienda una doble valoración con otras circunstancias; del daño resarcible considera que la admisión de este criterio se configuraría criterio de índole civil.

La crítica es que un elemento patrimonial no justifica la privación de la libertad de una persona, de la conducta del imputado en otro proceso y durante el mismo, considera que es un criterio sustancial en base a la conducta del procesado en el pasado recomienda su valoración en sentido positivo nunca en sentido negativo y otros factores al momento de la imposición de la prisión preventiva.

Fernandez (2013) en su tesis titulada “la prisión preventiva su validez y eficacia en la investigación preparatoria frente al principio de presunción de inocencia” fue sustentada en la UPAO, para obtener el grado académico de Maestro en Derecho Penal, refiere que el arraigo domiciliario es el lugar donde el imputado convive con su familia, asimismo este debe acreditar que ellos se verán perjudicados si él se aleja del hogar, porque dependen económicamente de este, es por ello la importancia su permanencia en la localidad.

El criterio del comportamiento del imputado, considera que hay una urgente necesidad de eliminar márgenes de errores al momento de su valoración automática con la reincidencia y habitualidad.

Loza (2013) menciona que el principio de inocencia es una garantía de libertad y trato de inocente, contraria a la prisión preventiva de aplicación excepcional, subsidiaria, adoptada mediante fallo judicial debidamente motivado, advierte que aún existen prácticas inquisitivas sobre el uso excesivo vulnerando principios de excepcionalidad, proporcionalidad, convirtiéndose en penas anticipadas,

generando masas de presos sin condena, esta mala praxis debería ser desterrado.

Trabajos previos internacionales

Lopez (2011) en su tesis titulada “Estudio jurídico del peligro de fuga en la legislación procesal penal guatemalteca” sustentada en la Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias jurídicas y sociales para optar el grado de licenciado quien arribó a la conclusión que el peligro de fuga, es considerado como el presupuesto más peligroso basado en el fundamento de que el procesado asistirá al juicio penal y en efecto no realiza ninguna maniobra para impedirla, su valoración debe hacerse en datos objetivamente reales del futuro proceder en el proceso del imputado.

Asimismo señala que problemas usuales son cuando la defensa técnica intenta de acreditar el arraigo, mediante los certificados de trabajo por la persona jurídica y natural, en su mayoría de casos los certificados otorgados por la primera resultan menos cuestionables que la segunda ya que para unos jueces le dan un alto mérito probatorio y otros no le prestan importancia alguna, pues el Juez, en colaboración con la Policía Civil, coligen si dichas cartas notariales o de referencias personales son ciertas contrario census bajo apercibimiento de ser denunciados.

Cuestiona el autor ya que es irrisoria por su cultura de informalidad y que esto denota un riesgo y pérdida de tiempo cuando el juez puede oficiar al sistema financiero para el informe de esta,

Otro elemento álgido el daño resarcible porque el peligro de fuga, no debe condicionarse a cantidades de dinero, porque no es el mismo criterio para una persona dedicada a negocios formales con grandes cantidades de ingresos que otros que perciben de sus labores esporádicas, pues considera que este presupuesto es ilegítimo que no debe valorarse.

Fernández (2013) en su tesis doctoral titulada: “correcta interpretación y aplicación de las medidas cautelares personales: la detención preventiva” sustentada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, arribó a la conclusión que para la determinación del peligro de fuga, se fundamenta en el arraigo, cuando el imputado o procesado no tiene razones ni responsabilidades para mantenerse en el lugar donde se lleva a cabo el proceso y este pueda eludir la acción de la justicia, en cuanto a las facilidades o capacidad del procesado para abandonar el país el criterio es la condición económica y la conexión con las organizaciones criminales en el extranjero, o actos preparatorios.

Con respecto a los criterios la conducta del imputado en un proceso anteriormente aquí es determinante si este se fugó y se ordenó su captura para determinar la existencia de un peligro de fuga, asimismo en cuanto a que el imputado tenga rechazos de reparar el daño económico ocasionado al Estado y que, además, la evidencia de las facilidades para abandonar el país con el uso de esos fondos presuntamente ilícitos.

Finalmente se debe tomar en cuenta por haber sido condenado en primera instancia ya que esa situación puede aparecer o aumentar el peligro de fuga, estos criterios deben evaluarse en sentido estricto, objetivamente con la finalidad de asegurar el proceso penal.

Monge (2012) en su tesis de posgrado titulada “Prisión preventiva y principio de presunción de inocencia un intento por problematizar la discusión” para optar el grado de licenciado, llegó a la conclusión que la prisión preventiva, es la medida de restricción de la libertad ambulatoria de las personas, previamente del fallo condenatorio, considerada por su finalidad eminentemente procesal; que al momento de su aplicación se trata como una sanción procesal ante una falta procesal, basándose en una medida de aseguramiento procesal ante la inseguridad de huida del imputado, obstaculización de prueba y repetición delictiva; quiere decir de una finalidad punitiva esta se convierte en una pena anticipada.

Bedón (2010) en su tesis de pre-grado titulada “Medidas cautelares: especial referencia a la prisión preventiva en la legislación penal ecuatoriana” sustentada en la Universidad Técnica de Cotopaxi, para optar el título de abogada quien llegó a la conclusión que la fundamentación de las resoluciones judiciales, son garantías básicas de un debido proceso, exigiendo a los órganos judiciales que deben fundamentar de forma clara y precisa los presupuestos o fundamentos de su imposición, que no basta con alegar el peligro de fuga, sino que hay que enumerarlas, describirlas, explicarlas, siendo estas objetivas y así descartar cualquier arbitrariedad.

Llobet (2009) en su artículo titulado “La prisión preventiva y la presunción de inocencia según los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano” refiere que el presupuesto más delicado de la prisión preventiva es el peligro de fuga, debido a que la norma penal no determina, ni establece criterios tasados, porque son enumerativos, es decir deducción o aplicación automática o instantánea limitando la valoración de elementos en sentido estricto; antagónicamente deja una flexible y amplia discrecionalidad por parte del órgano jurisdiccional en su actuación, porque él debe analizar en un marco de principios constitucionales, preceptos, etc.

Considera examinar en conjunto según el caso concreto, además debe motivar las razones de su decisión, esta flexibilidad de discrecionalidad sin duda puede a llevar diversos preceptos o criterios al momento de su apreciación o valoración que ante su infracción se violaría la presunción o suposición de inocencia, resultando incompatibles con el Estado de derecho.

Teorías relacionadas al tema

Principio de presunción de inocencia

Villegas (2016) recuenta que en los siglos XVII Y XVIII, en Europa, el proceso penal era cruel, desproporcional e inhumano, propio de un sistema inquisitivo, debido a que el delincuente era considerado como pecador, pero este panorama

cambio a la segunda mitad del siglo XIII, gracias a la influencia de corrientes filosóficas como del marqués Beccaria; que sostenía que una persona no debe ser denominada culpable antes de una sentencia, ni la sociedad debe desprotegerlo sino hasta que se demuestre lo contrario (pp. 163-171).

Es decir, era una época en que el juez arbitrariamente nombrado por el rey ostentaba todo el control, pero por el lado el delincuente, era considerado como pecador que debía confesar su infracción no ante Dios, sino ante los hombres por ende su culpabilidad gozaba con beneficios sobre la pena, contrario census era sujeto a una investigación, consistiendo en preguntas engañosas o capciosas, con la finalidad de entrar en contradicciones.

En los casos de delitos mayores, estos eran sometidos a la práctica del tormento, mediante el dolor, temor, miedo al uso de una tortura. Sin duda alguna era una época arbitraria cimentados en presunciones e indicios de culpabilidad.

Pues este criterio evolucionó desde la segunda mitad del siglo XIII, por corrientes filosóficas como el marqués Beccaria, sosteniendo que una persona no debe ser denominada culpable antes de una sentencia, y que la sociedad debe desprotegerlo sino hasta que se demuestre lo contrario.

Estas ideas de revolución ocasionaron un cambio de sistema liberal, traspasando fronteras como en Europa y Francia, teniendo una aceptación unánime sobre la idea humanitaria y el rechazo de un sistema arbitrario, dejando de lado la acepción de culpable, sino que se partía de la dignidad de la persona basado en principios humanitarios.

Llobet (2016) sostiene que en la doctrina existen varias posturas sobre este principio de presunción de inocencia, siendo antagónicamente sostenida por dos escuelas, la clásica y la positivista (pp. 70-80).

Es decir, según la doctrina tenemos como defensor de la primera escuela a Francesco Carrara, que se basaba en tres propósitos: i) La seguridad de la

sociedad frente a la delincuencia, ii) La seguridad de los honestos frente a la autoridad, iii) la seguridad del malhechor frente al estado o autoridad, en el sentido que no se juzgue más allá de lo requerido.

Por otro lado, fue la segunda escuela positivista de la criminología Italiana, siendo sus defensores Cesare Lambroso, Raffaello Garafalo y Enrico Ferri, el primero sugirió el total rechazo, asimismo Filippo Grammatica, sostenía que este principio no tiene espacio a futuro para la seguridad de la comunidad, porque el imputado es bien social o antisocial, y si recae en lo segundo debe permanecer en la cárcel.

En cambio, para Garofalo, considera que este principio desgasta la actuación penal de una comunidad, porque es un obstáculo y un beneficio para el imputado con posibilidad de obtener su libertad ocasionando un peligro para la sociedad, o a la víctima.

Para Enrico Ferri, consideró que este principio, es relativo sosteniendo en que toda persona es honrada mientras no se demuestre lo contrario, y que los malhechores son minoría a comparación del universo de gente honrada.

Villegas (2016) considera que es un principio básico, fundamental que tiene el imputado en un proceso penal, su principal propósito es de intervenir o limitar la actuación del Estado, en cuanto al empleo del *ius Puniendi* (p. 195).

Es decir que la presunción de inocencia protege al imputado frente a los posibles actos arbitrarios del Estado, por ello resulta incompatible con la medida de la prisión preventiva, y que la presunción de inocencia, guarda estrecha relación con el derecho de libertad personal en el proceso penal.

Este principio también está establecido en el artículo 11. 1º por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los siguientes DUDH, que toda persona que se encuentra en un procedimiento penal, tiene derecho a que se presuma inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, conforme a las leyes establecidas, mediante juicio público con todas las garantías necesarias para su defensa.

Nuestro ordenamiento jurídico también es concordante con estos instrumentos internacionales, en la protección de los derechos humanos, de acuerdo a lo establecido en el art 2º, inciso 24º de la Constitución, que establece que toda persona en principio se le debe considerar como inocente hasta que no se declarado judicialmente su culpabilidad.

Como podemos observar en la doctrina explican ampliamente sobre el tratamiento de este principio, que, si bien es cierto que ante un hecho delictuoso existe un presunto autor del hecho material, pues su tratamiento debe ser siempre como inocente, hasta que se determine por la autoridad judicial lo contrario o su culpabilidad.

Es decir que debe existir un doble tratamiento en principio la efectividad del proceso penal con el respeto a los derechos fundamentales, asimismo es importante resaltar que este principio no es absoluto, sino que es relativo es decir que su tratamiento parte de una presunción iuris tantum y no una presunción absoluta, que para que esta sea desvirtuada es necesaria una cierta valoración de pruebas y circunstancias.

Principio de proporcionalidad

Este principio se encuentra establecido en el último párrafo del art. 200º, de la Constitución, consagrado como un principio general en nuestro ordenamiento jurídico básicamente limita el ejercicio estatal de control no solo al legislador también a todos los poderes del estado en su actuación, especialmente los vinculados con los derechos fundamentales (Constitucion Politica, p. 51).

Es decir que este principio tiene mayor relevancia en el ámbito del Derecho Penal, de acuerdo a lo enunciado en el CPP de 2004, en su art. VI del Título Preliminar.

“[...] El fallo judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, [...] como respetar el principio de proporcionalidad”.

Asimismo, el art. 203.1º del mismo cuerpo normativo señala.

“Las medidas que disponga la autoridad, [...] deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad [...]”.

En el mismo sentido el art. 253.2º del mismo código adjetivo penal que señala.

“La restricción de un derecho fundamental [...] se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad [...]”.

De acuerdo a lo expresado este principio se comporta como un mecanismo de control, por lo tanto, los operadores de justicia, deben encontrar una vinculación adecuada entre la gravedad y la importancia del delito.

Sanguine (2003) refiere que el principio de proporcionalidad, al momento de aplicar la prisión provisional, tiene como finalidad solucionar una controversia entre la libertad individual y la seguridad del individuo, es decir que el juez, debe equilibrar o delimitar un punto medio no matemáticamente hablando sino evaluando desde de un jerarquía de valores o principios constitucionales, como el principio supremo del favor libertatis (p. 433).

En efecto los derechos fundamentales, no son absolutos sino relativos, por lo tanto es importante exhortar a los operadores de justicia, que al momento de evaluar el dictado de la prisión preventiva, deben hacerlo a través de una valoración estricta, sobre los hechos materia de imputación y el daño ocasionado al bien jurídico protegido para equilibrar la intensidad de la medida y la transcendencia del peligro de procesal

Asimismo, en el art. 7. 3º, la CIDH, ha establecido que ninguna persona puede ser sometida a detención por prácticas ilegales o arbitrarias, por lo tanto, es importante hacer un equilibrio entre la medida de coerción y el peligro procesal.

Villegas (2016) menciona que para poder considerar que una medida de coerción es proporcional, es necesario al momento de utilización se supere el test de

proporcionalidad, que se descomponen en juicio de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad (p. 241).

Juicio de idoneidad

Del Rio (2016) señala que una medida es idónea cuando alcanza un propósito perseguido por el Estado (p. 46).

Es decir que toda limitación de derechos fundamentales, debe ser adecuada para obtener un fin legítimo por el Estado, en consideración a una doble valoración, primero que toda medida que tiene intervención en lo derechos fundamentales debe ser relevante y tener un fin legítimo, segundo que la medida debe ser idónea para conseguir tal finalidad.

En el ámbito de la prisión preventiva, es importante recalcar su finalidad que es asegurar el éxito del proceso penal, es decir que el imputado no evada la acción del ius puniendi o la obstaculice las fuentes de prueba, es decir una finalidad netamente cautelar legítima, es decir que esta medida es idónea, porque en efecto se daría la prisión del imputado, y con esto se impediría tal injerencia de este en el proceso, pero en la realidad nos demuestra que no siempre asegura, para ello lo explicaremos más adelante.

Juicio de necesidad

Villegas (2016) refiere que es conocido como juicio de subsidiaridad, alternativa o de mínima intervención, tiene mayor relevancia al momento de imponer entre todas las medidas que resultan idóneas en utilizar la menos gravosa o de menor grado de limitación de los derechos fundamentales de la persona humana (p. 246)

Es decir, utilizar la medida menos aflictiva o lesiva entre todas las medidas idóneas que existen en un ordenamiento jurídico y su prohibición de utilizar una medida gravosa en los casos que exista un medio alternativo que puede llegar a

cumplir la finalidad perseguida por el Estado, porque de lo contrario sería injustificado o excesivo.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del art. 253º del CPP, que la limitación de un derecho fundamental será cuando fuese indispensable [...]”. Es decir que la limitación de un derecho fundamental solo debe ser fijada cuando esta sea imprescindible y no sustituible con otra medida de semejante eficacia, pero menos lesiva que esta, en el caso que esta medida desaparezca esta debe desaparecer o ser sustituida por otra menos aflictiva.

En cuanto a la medida de prisión preventiva, que es la más aflictiva de todas las medidas, es necesario al momento de su fijación utilizarla como ultima ratio, o excepcional y subsidiaria.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en su R.N N° 863-2005, ha señalado que el Juez, tiene la facultad de imponer ciertas medidas a los procesados, pues esta imposición no debe ser arbitraria, sino que debe de responder al sub-principio de necesidad, siempre que resulte indispensable la no existencia del peligro procesal.

Del rio (2016) refiere que la imposición de una medida gravosa cómo la institución objeto de investigación, debe ser doblemente de ultima ratio o excepcional (p. 48).

Es decir que el Juez, al momento de imponer esta institución, debe tener presente la coexistencia de otras medidas cautelares, como la (comparecencia simple o restringida, detención domiciliaria, la limitación de salida o la suspensión de derechos) por lo tanto se recurrirá a la prisión preventiva como la última opción de forma subsidiaria cuando las otras medidas no resulten idóneas. Por lo tanto, se prohíbe el uso ordinario o normal de esta medida de coerción. Porque de lo contrario se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia.

Juicio de proporcionalidad en sentido estricto

Villegas (2016) refiere para que una limitación de derechos fundamentales sea legítima es necesario que sea proporcional entre la medida examinada y el grado de afectación del derecho fundamental, es decir un juicio de valor ponderativo de intereses contrapuestos (p. 253).

Para que la medida sea proporcional en sentido estricto, es necesario una ponderación entre el interés personal frente a los intereses del estado. Si es bien cierto que la medida de restricciones de derechos debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo, que, ante la advertencia de la inexistencia de este fin, ya no es necesario seguir con su análisis ya que la medida reviste de inconstitucional.

Asimismo, no se trata la ponderación de la restricción de la libertad personal sino la totalidad de las consecuencias nocivas que esta puede generar al imputado y a su familia o dependientes de este.

Pues el juicio de proporcional en sentido estricto exige que exista un gran acerbo probatorio, de tal manera que no se puede recurrir a la imposición de restricción de derechos del imputado, cuando no existen medio de prueba que permitan afirmar un alto grado de probabilidad respecto a que pueda el imputado frustrar los actos de investigación.

Es decir que la actuación del juzgador en la búsqueda de pruebas o cuando fije una medida restrictiva de derechos, deben hacerse con arreglo estricto al principio de proporcionalidad. Es importante tener en cuenta que ante cualquier limitación de libertades o derechos implica renuncia, sacrificios por lo tanto es imprescindible que la medida debe ser justificada y superar el test de proporcionalidad.

La debida motivación de las decisiones judiciales

Según la RAE (2004) el significado de motivación es, el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona.

Lo dispuesto por el Tribunal Español, suscribe que la limitación de un derecho fundamental como la libertad personal o ambulatoria, debe fundarse bajo reglas de proporcionalidad, obligándose a motivar la decisión de la autoridad judicial (STC español 128/1995).

El Tribunal Constitucional, refiere que la motivación de una medida restrictiva como la libertad personal, debe cumplir en sentido estricto, los tres juicios para determinar si es proporcional para así descartar cualquier tipo de arbitrariedades (EXP. N.º 1091-2002-HC/TC).

Del Rio (2016) indica que la motivación de las decisiones por parte de la autoridad judicial, son la base principal de un ordenamiento jurídico, porque es la única manera de comprobar en sentido estricto, los juicios de valoración para determinar que la medida adoptada es proporcional (p. 126)

Villegas (2016) refiere que el concepto de la debida motivación de las decisiones judiciales, lo conceptualiza como la expresión psicológica o interiorización intelectual del magistrado para exponer su decisión, además como expresión racionalista, que recuenta razones que justifican su decisión (p. 258).

Es decir que la debida motivación es la justificación jurídicamente razonada del magistrado plasmado en una decisión o resolución judicial conforme a derecho, porque no se trata de aclarar la fórmula para llegar a esa conclusión, sino que además es explicar que las razones son las adecuadas y legítimas.

Es decir que no se trata, que el Juez, explique cuál ha sido el proceso psicológico, sociológico para llegar a tal decisión, sino que, además, ponga de manifiesto esos motivos para determinar si son aceptables desde la óptica del ordenamiento jurídico.

La Constitución Política, lo establece en el art. 139º numeral 5, de la siguiente manera.

“la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias [...]”.

De acuerdo a nuestra Constitución, debe entenderse que toda persona tiene el derecho a exigirle al Juez, que fundamente o justifique su decisión, por tanto, ellos están en la obligación de cumplir tal exigencia, para ello se requiere que sea de forma escrita o expresa.

Se denomina falta de motivación de las resoluciones cuando el Juez, no haya expresado mediante una resolución la exposición de su razonamiento, aun cuando su razonamiento no exteriorizado hubiera sido impecable.

Sobre lo referido por su parte el Tribunal Constitucional, sostiene lo siguiente: el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, se basa en que los jueces, al momento de resolver las controversias de intereses estos expresen sobre las razones o justificaciones objetivas que le llevaron a tomar tal decisión. Asimismo, que esas razones no solo provengan del ordenamiento jurídico vigente, sino que además provengan de los propios hechos siempre y cuando estén debidamente acreditados (STC. Exp. Nº 728-2008-PHC/TC F.J 06).

Desde este enfoque la motivación de las resoluciones judiciales, se componen por las razones tanto de hecho y Derecho, que le sirven al Juez, para motivar su decisión es decir fundamentación fáctica y jurídica de la decisión judicial.

Asimismo, por su parte la Corte IDH establece que la motivación de las resoluciones judiciales, es aquella justificación razonada del juez para llegar a una conclusión.

Este principio es una garantía en relación a una adecuada administración de justicia por parte de los órganos del estado para otorgar credibilidad respecto de las decisiones jurídicas que afecten derechos básicos o fundamentales para ello

se requiere una debida fundamentación, contrario census serían decisiones arbitrarias.

Es decir que el Juez, está en la obligación de poner en conocimiento al ciudadano sobre cuáles fueron los hechos, motivos y normas vigentes, en que se basó su decisión con el objetivo de descartar cualquier indicio de arbitrariedad, es decir una justificación interna y externa, para así otorgar credibilidad y salvaguardar el derecho a un debido proceso.

Asimismo, es importante que la debida motivación, no solo se sustente en la valoración de pruebas escogiendo tan solo las favorables y en extremo descartando a priori las contrarias pues esta práctica sería una distorsión sistemática de su propio razonamiento.

Pues la contratación de pruebas en contrario es indispensable para justificar los fundamentos de su fallo o decisión, porque la prueba en contrario es el mecanismo de control de la validez racional y del fundamento probatorio de toda reconstrucción de los hechos siendo también concordante con lo expresado en el art. 394, inciso 3, del CPP de 2004.

Si el Juez, está en la obligación de contrastar las hipótesis planteadas con las pruebas que la sustentan. Que si la hipótesis planteada no se somete de manera motivada y rigurosa a la prueba de fuego ni se refuta los medios de prueba en contrario, pues no tendría cierto grado de credibilidad y esta sería cuestionable por la parte afectada. Es por ello que es necesario que el Juez valore no solo las hipótesis positivas, sino también las hipótesis negativas para poder otorgar una decisión final.

Ahora bien, esta fundamentación no se requiere de sea una argumentación extensa, ni tampoco escueta, sino que sea suficiente de aquellos que ejercen la potestad jurisdiccional.

Principio de legalidad

Villegas (2016) menciona que el principio de legalidad, en sentido general comprende a las acciones atribuidas al Estado, subdividiéndose en el principio de Legalidad Penal que es la conminación penal del delito y la consecuencia jurídica, bajo reglas de interpretación sistemática y teleológica de todas las normas del ordenamiento jurídico (p. 224).

Mir (2011) manifiesta que el principio de legalidad, se da en tres espacios, primero que el delito este precisada en una ley o norma (*nullum crimen sine lege*); segundo que la aplicación de la pena no sea grave o diferente (*nulla poena sine lege*); tercero que ante un delito exista una consecuencia jurídica que recaiga en un fallo o sentencia judicial (p. 224).

Es decir que el principio de legalidad, cumple una doble finalidad de dar garantías jurídicas a los ciudadanos frente de los excesos o arbitrariedad del estado. Es decir que la ley determine el delito asimismo la consecuencia jurídica de forma clara y expresa como su imposición basada en objetivos reguladores.

Medidas de coerción

Neyra (2010) señala que nuestro ordenamiento jurídico adopta dos tipos de medidas limitativas de derechos de carácter real y las de carácter personal (p. 490).

La primera es de aseguramiento pecuniario, es decir limitar la libre administración y disposición de bienes patrimoniales para conservarlos para una eventual ejecución al término del proceso que recaerá en el pago de una multa o indemnización. La segunda es está destinada a restringir la libertad ambulatoria de las personas procesadas, siendo estas interpuestas por el órgano judicial, con la finalidad de asegurar el procedimiento penal o la ejecución del fallo condenatorio.

Rosas (2003) refiere que son impuestas al inicio y durante el curso del proceso penal buscando garantizar su finalidad (p.466). Es decir que son un conjunto de limitaciones en la práctica de las libertades personales o bienes del imputado, impuestas al inicio de una investigación o durante la trayectoria del procedimiento.

San Martín (2015) considera que este acto sólo es realizado por la autoridad jurisdiccional, a través de una resolución fundada en sujeción a principios (p. 442), quiere decir, que la única autoridad competente para la aplicación de esta medida es el Juez, contrario sensu sería arbitrario.

Salas (2011) refiere que en la doctrina son conocidas como medidas de precaución (p. 179); Es decir que para algunos autores esta medida de coerción personal sirve para asegurar la ejecución de la pena, y otros para considerar que además sirven para respaldar la comparecencia del procesado en el proceso penal, ambas posiciones se admiten.

En conclusión, consideramos que esta medida es interpuesta durante un proceso penal, mediante una resolución del órgano jurisdiccional, la cual limita un derecho fundamental del imputado, fundamentándose en fines netamente de aseguramiento procesal.

Prisión preventiva.

Según (La Real Academia Española, 2004) define que es la prisión que sufre el procesado durante la sustanciación del juicio.

En el ámbito del derecho comparado La Corte, estima que la prisión preventiva, es la medida más severa que se le puede imponer o fijar a un individuo, por tal motivo es excepcional, rodeada por un cúmulo de principios como el de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, que son característicos de una comunidad democrática (CIDH, caso Tibi Vs. Ecuador).

Asimismo La Corte, considera que debe satisfacer ciertos requerimientos primero: debe estar dispuesto en la norma, es decir el respeto de los requisitos, segundo; debe perseguir un propósito legal, es decir que el imputado no imposibilite el avance del proceso, ni se sustraiga de la justicia y por ultimo esta medida debe ser idónea y estrictamente proporcional, que ante cualquier restricción sin motivación suficiente y sin cumplir estos requisitos será arbitraria (CIDH, sentencia Chaparro y otro Vs. Ecuador).

En esa misma línea el Pacto; ha establecido que su utilización de esta institución debe ser excepcionalidad y no la regla general (PIDCP art. 9.3).

Las Naciones Unidas, ha elaborado ciertas reglas con respecto a esta institución considerando que su utilización debe ser de última ratio (Reglas de Tokio; artículos 2ª, 3ª y 6ª) Es decir que los estados en su organización de justicia, establecerán un listado o catálogo de medidas alternativas a la prisión preventiva, desde la iniciación del litigio, hasta el dictado de la sentencia.

Llobet (2016) menciona que el uso de esta institución, radica en privar la libertad de una persona, antes del fallo condenatorio por el órgano judicial, basándose la inseguridad durante el desarrollo del juicio, la ejecución del posible fallo condenatorio o la perturbación del proceso para evitar la averiguación de la verdad (p. 27).

Asencio (2004) señala que esta medida no debe transformarse en una condena anticipada (pp. 494-495). Es decir, en esencia al momento de atribuir un hecho delictivo, pues su accionar del magistrado debe ser netamente procesal, imparcial sin considerar una finalidad diferente a ella.

Apreciamos que, en la doctrina, han establecido que la prisión preventiva, es excepcional, relacionándola implícitamente con el principio de presunción de inocencia, durante el tiempo que dura el proceso o juicio.

Por su importancia han establecido tres criterios o pautas, primer criterio, es de fijar garantías al imputado por parte del *Ius Puniendi* del Estado, como punto de partida la presunción de inocencia y no su culpabilidad, segundo criterio, se obliga que su fundamentación de esta institución, sea razonable o proporcional de las reglas de juicio y por ultimo criterio, que la regla sea la libertad del imputado y no de carácter remunerador en el sentido que no se interponga como pena anticipada.

En el plano nacional el TC, considera que esta institución restringe derechos personales o reales, por lo tanto, no puede ser ordinaria sino extraordinaria, accesoria, secundaria, racional y proporcionada. (Exp. Nº 3357-2,003-HC/TC).

San Martín (2015) considera que la imposición de esta institución, es la más irreflexiva que puede interponer un ordenamiento jurídico durante un proceso penal, y esta se fija mediante una resolución judicial, estrictamente motivada, con carácter provisional, basándose en la amenaza que escape el acusado antes del juicio o que pueda obstaculizar las actividad o medios probatorios (p. 453).

Neyra (2010) indica es la forma de conocer la ideología de un Estado, a través de sus instituciones, asimismo considera que es el instituto más gravoso que interpone el ordenamiento jurídico durante el desarrollo de un proceso penal, restringiendo la libertad ambulatoria de los individuos. Por lo tanto, es de naturaleza instrumental y provisional según el fin que persigue (p. 509).

Del Río (2016) precisa que CPP, no es una herramienta político-criminal, solo es regulador de la aplicación del código sustantivo, si se permitiese que esta institución, tenga otros fines distintos a su naturaleza, con sujeción al código sustantivo, esta se contaminaría por el cumplimiento de reclamaciones sociales, como seguridad ciudadana, siendo contrario a la Constitución.

El CPP, regula en el art. 253, autorizando la limitación de libertadores personales, siempre y cuando sea imprescindible y con tiempo necesario, descifrando que esta institución, es accesoria, que se utiliza en *última ratio*, es decir que la

implantación de esta medida debe examinarse en dos momentos; primero la verificación de los requisitos según el art. 268, CPP, segundo que no exista una medida menos fuerte y eficaz que aquella (pp. 151-153).

Según el análisis del (EXP. N.º 1091-2002-HC/TC) se crítica el criterio adoptado en su fundamento once, porque aun cumplidos los requerimientos exigidos por ley, automáticamente suprime a las otras medidas que aseguran el desarrollo y la conclusión de proceso, quiere decir de una medida accesorio, secundaria, o excepcional se traslada a una regla ordinaria, usual o general. En cuanto a aplicación de la institución de prisión preventiva.

Estamos de acuerdo, con lo dicho por el Tribunal Constitucional Español, que el uso de la prisión preventiva, debe buscar la armonía entre las tendencias de intereses comunes de los intereses personales o individuales orientados al principio de in dubio pro libértate o favor libertatis es decir de carácter restrictivo o limitativo. (SSTC Español pp. 88-1988).

Presupuestos de la prisión preventiva

Para que se declare razonable y fundada la imposición de esta institución, debe cumplir copulativamente con los siguientes presupuestos materiales:

Fumus boni iuris

Se encuentra regulada en el art. 268º del CPP de 2004: que para su aplicación deben concurrir tres presupuestos:

“Artículo 268.aº. - Que deben existir fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo” (Código procesal penal, p. 90).

Villegas (2016) se refiere a dos aspectos, primero debe existir una perspectiva lógica o razonable de la existencia de indicios, vestigios, huellas de la

subsistencia de un hecho grave, segundo que se requiere de un alto nivel razonable de verosimilitud, para precisar que el imputado es el autor o causante del delito y no una simple suposición (p. 295).

Es esta premisa se refiere que el Juez, antes de determinar esta medida, es necesario determinar objetivamente la existencia de un alto grado de certeza que el imputado es el autor o partícipe del hecho delictivo, es decir un nexo entre el hecho delictivo y el sujeto pasivo de esta medida.

La gravedad de la posible pena

Nuestro cuerpo normativo, ha dispuesto ciertas condiciones para poder establecer este presupuesto:

“Art. 268.bº. - Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad” (Código procesal penal, p. 90).

Del Rio (2016) indica para fijar este presupuesto material parte del límite de la pena futura de 4 años (p. 179).

La Corte Suprema, ha fijado que su valoración requiere de un estricto análisis como la lesividad de los bienes jurídicos, la proporcionalidad de la pena y la comprobación de las circunstancias que podrían recaer sobre diversas fórmulas de agravación o disminución de esta, haciendo referencia al art. 45.a CPP.

Criticamos este precepto porque su fijación es automática, limitando la actuación de la autoridad judicial y fiscal, además se requiere otra valoración en relación al art. 45.a CPP, haciendo doble valoraciones de aumento de penas y además limitando el derecho premial, consideramos que su práctica automática puede ocasionar serios y graves daños como es la restricción de la libertad personal.

De acuerdo a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, este presupuesto se ha establecido en:

“Art. 268.cº Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)” (Código procesal penal, p. 90).

Villegas (2016) refiere que es el presupuesto más importantes y antagónicos, porque su valoración es de carácter discrecional por parte del magistrado para la fijación de esta institución, cimentándose su decisión de la existencia del peligro de fuga u obstaculización en la obtención de las fuentes de prueba (p. 306).

Estamos de acuerdo que es el presupuesto más delicado y riesgoso, en el sentido que su valoración recae en ámbitos de discrecionalidad para el juzgador, que tiene que evaluar si en el futuro el imputado eluda el proceso penal o que pueda obstaculizar u ocultar los medios de prueba que puedan beneficiar en la investigación.

Peligro de fuga

El precepto legal del peligro de fuga, se encuentra establecido en art. 269º del CPP - 2004, para que al momento de su calificación se evalúe el peligro concreto de fuga.

Del Rio (2016) refiere que este precepto legal es el aseguramiento por mantener al inculcado en sujeción al proceso, especialmente en el juicio oral, y asegurar la presencia en la ejecución de la tentativa sentencia, es decir una tesis de doble finalidad (p. 192).

Llobet (2016) considera que este precepto legal, debe buscar fines de aseguramiento procesal y no de carácter material, con el motivo de evitar la fuga del imputado, en el desarrollo del proceso penal, asimismo es afirmada por la sala constitucional de costa rica, que solo debe ser utilizada o aplicada este precepto

legal, para los fines propios del proceso, siendo concordantes con Becarria, que es de naturaleza procesal, asimismo ratifica lo dicho por La CIDH, en la sentencias: Suarez R; Tibi; Acosta C y otros (pp. 147-150).

Del Rio (2016) considera que los criterios utilizados para determinar este precepto legal, son similares las circunstancias descritas en el CPP costarricense, en acepción que son de carácter enumerativos y no de carácter taxativo o específico (pp. 195-196).

Villegas (2016) ratifica que el CPP, no fija criterios tasados sobre este presupuesto, sino se limita en fijarlos, es decir que no existe un análisis automático sobre los elementos, al contrario, esa valoración se deja bajo la discrecionalidad del juzgador en forma individual o conjunta, además debe motivar el fallo de su decisión (pp. 312-313).

La circular de prisión preventiva, ha fijado que el juzgador puede adicionar criterios como el estado de salud del imputado o acusado, también recalca que los art. 269 y 270. CPP, son tipologías de uso referencial para analizar el peligro de fuga, y ni son taxativos, por lo tanto, es importante un análisis o valoración en conjunto sobre las circunstancias que se presentan en cada caso en concreto.

Consideramos que este precepto legal es de carácter discrecional del Juez, quien debe determinar la existencia del peligro de fuga, para ello debe hacerlo a través de un análisis estricto de las circunstancias y las actitudes o comportamiento del imputado para asegurar el normal desenvolvimiento del proceso penal y la eficacia de una tentativa sentencia.

Criterios para determinar el peligro de fuga

De acuerdo al art. 269.1º del CPP-2004, el Juez al momento de determinar la existencia del peligro de fuga debe tener en cuenta el arraigo que tiene el imputado en el país.

El arraigo

La real academia española (2004) indica que deviene de la acción de arraigar, en el sentido de echar o criar raíces, estableciéndose de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas.

Villegas (2016) refiere que no son taxativos en ese contexto el arraigo tiene tres extensiones: 1). que se vincula en la posesión del bien, es decir que exista un domicilio, una vivienda, una ubicación, o dirección conocida; 2). El arraigo familiar son los vínculos habituales de los familiares con el acusado 3). Arraigo laboral, relacionado con la subsistencia u ocupación del acusado (p. 313).

Del Rio (2016) que el arraigo; es el asentamiento de una persona en un determinado lugar, como la posesión de sus bienes, residencia, trabajo u oficio y de la administración de sus negocios, o la titularidad de un bien inmueble, dentro de los alcances de justicia, asimismo con vinculación a sujetos o familiares aun cuando no viven con él, pero dependen su subsistencia de este, Nótese que el imputado no puede inhibirse a declarar sobre la identificación de su domicilio, y si sobre los hechos si lo desea (p. 197).

La circular de prisión preventiva (2011) establece que el arraigo o situación, no se puede valorar en forma absoluta, entiéndase que todo individuo lo tiene incluso hasta un indigente. Es indispensable un análisis lógico, racional basándose en la experiencia, no debe confundirse que el arraigo solo es: el domicilio o vivienda conocida, la ocupación laboral y lazos de familia, etc.

No se trata de analizar la existencia o inexistencia de este precepto, sino es la ponderación de la calidad del arraigo, porque aun si lo tuviese no es suficiente la seguridad del éxito del proceso. También es incorrecto que por el hecho de ser extranjero (s), se imponga la prisión preventiva, o que tenga un constante movimiento migratorio tampoco da lugar a que se extingue el arraigo por ese motivo, entonces no se debe fijar automáticamente la prisión preventiva, sino una evaluación en conjunto de acuerdo a cada situación.

Entonces se puede decir que el arraigo, tiene mucha vinculación socio económicos, asimismo este elemento no es taxativo, es flexible en el sentido que su determinación se cimentara en una evaluación en conjunto utilizando la lógica y la experiencia del juzgador.

La gravedad de la pena

Del Rio (2016) refiere que la imposición de la pena se instaura en el art. 268.bº CPP, asimismo es importante en aclarar, que no es duplicidad sino es el complemento o añadido del art. 269.2º CPP, porque el primero: examina el tipo de injusto, la responsabilidad, y como resultado la imposición de la condena efectiva superior a cuatro años y la segunda: la vincula al comportamiento del acusado con respecto a la gravedad de la posible condena a imponerse con otras circunstancias para determinar si existe peligro de fuga.

Es por ello no debe medirse en suposiciones o meras probabilidades, si no en la comprobación de cada situación, obviamente con resultados distintos porque no es igual el análisis de un acusado reincidente como un primerizo. Es importante valorar la gravedad de la pena junto a otras circunstancias relevantes.

El daño resarcible y conducta del imputado

Del Rio (2016) señala que el análisis de este precepto es en relación al agraviado o víctima, con la intención de fortalecer el control social de aquellos individuos que realizan conductas lesivas en contra de los bienes jurídicos asegurados por el estado, y además en retribuir la posición del agraviado o víctima, en el sentido que se debe resarcir sus derechos violados o la indemnización de sus daños materiales.

Como resultado de la Tutela o auxilio judicial efectivo. Según el CPP, no es cierto que el daño resarcible se pueda analizar desde el peligro de fuga, cuando es factible solicitarse por la vía civil para su indemnización, sin ser necesaria la

presencia en el juicio del demandado, además se puede dictar medidas cautelares en favor del demandante.

La Corte Suprema, en su propósito por salvar esta acepción haciendo mención a la gravedad del delito con la relación de las circunstancias pudiéndose empeorar en medida del cuantun de la pena a establecerse (pp. 209-214) consideramos que no es claro este precepto, y es discutible e innecesaria cuando esto se debería ver en otras vías que satisfagan su finalidad como es en vía civil.

La pertinencia del acusado a una organización criminal o su reintegración

Villegas (2016) reitera que el precepto de peligro de fuga, o de impedimento procesal, no son absoluto son enumerativos bajo esta premisa según la última modificatoria del CPP, en acepción al peligro o riesgo procesal, asimismo y en concordancia con la circular de la prisión preventiva, su valoración se basa en la gravedad de la pena y de integrar una organización delictiva (p. 330).

La crítica que se realiza porque es ilegítimo la presunción del peligro de fuga, sino debe cimentarse en circunstancias reales de cada caso en particular, que de acuerdo con la práctica o la experiencia, en varios procesos los acusados huyen del proceso penal, ayudados por dicha organización, sin embargo se recomienda que en todos los casos exista una comprobación objetivas y proporcionales, porque puede ser que al inicio de las indagaciones el imputado si pertenezca a una organización delictiva, pero que de acuerdo al resultado de esas investigación se advierta que no existe peligro o riesgo para el proceso penal entonces no se debería fijar la prisión preventiva.

Otros criterios

Como se ha indicado en elemento peligro de fuga, no regula supuestos taxativos, sino enumerativos siendo a juicio discrecionales del magistrado para su valoración en sujeción a la carta magna y principios básicos. Asimismo, el circular de la prisión preventiva, considera otras acepciones o criterios deben ser

valoradas por el magistrado al momento de determinar riesgos en el camino del proceso, que como son el estado de salud del acusado vinculándose a la conceptualización del arraigo del acusado.

La conceptualización de banda está relacionada con una organización delictiva o criminal; y su influencia en el acusado porque se escape fuera del país o que se esconda de la acción de la justicia y por ultimo está relacionado con la conducta del acusado en el proceso penal, en el sentido de la perentoriedad del juicio oral, como se ha indicado la reforma del CPP, es de carácter progresivo sobre la determinación de alguna medida en el estadio del proceso con la finalidad de llegar a la verdad material

Medidas accesorias

Decreto Legislativo que regula la Vigilancia Electrónica Personal, se considera una buena alternativa, para el caso de los procesados, que, si bien es cierto ante la imposición de la prisión preventiva, esta propuesta resulta ser la más adecuada, ya que este mecanismo de control, tiene como finalidad monitorear el tránsito de los procesados o condenados dentro de lo que, del espacio designado u ordenado, este requerimiento puede ser solicitado de parte

Se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, a) para los condenados con una pena no mayor a ocho años, b) los que tengan una condena de pena privativa de libertad efectiva no mayor a ocho años, no aplica para los reincidentes y habituales entre otros.

En el presente tema de investigación a efectos de una mejor comprensión se debe considerar a continuación los siguientes conceptos.

- **Arraigo:** Es el establecimiento de una persona en un determinado lugar como estar en posesión o la titularidad de un bien inmueble, residencia, trabajo o la administración de sus negocios, o la titularidad de un bien inmueble, asimismo está relacionado con personas.

- Criterios: es el juicio de valor o discernimiento que tiene una persona respecto a algo.
- Debida motivación: Es la expresión psicológica o interiorización intelectual de una persona para exponer alguna decisión, es también la justificación jurídicamente razonada de una decisión o resolución judicial conforme a derecho.
- Medidas cautelares: según su naturaleza son materiales y transitorias, porque ambas restringen derechos, sin embargo, su finalidad que persiguen son distintas, la primera es orientación probatoria, quiere decir en garantizar la fuentes probatorias o fundamentos para ser estimadas en el litigio, en cambio la segunda es la de salvaguardar el proceso, osea custodiar la inseguridad procesal o medios probatorios.
- Periculum in mora: Es considerado por la doctrina como uno de los elementos más importantes y antagónicos porque en este elemento su valoración es realizada bajo el juicio de discrecionalidad por parte de los magistrados para la fijación de la medida restrictiva de la libertad personal como la prisión preventiva o provisional cimentándose su determinación en dos elementos el Peligro o riesgo de fuga, y de obstaculización en la obtención de las fuentes de prueba valoradas en el proceso penal.
- Peligro de fuga: Es una medida restrictiva de derechos o libertades, básicamente la libertad personal, que en esencia solo debe buscar fines de aseguramiento por excelencia procesales y no materiales, con el motivo de evitar que el imputado huya o escape en el transcurso del proceso penal.
- Presunción de inocencia: Hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea probado (Rae, 2014).
- Principios: son las pautas, orígenes, las razones fundamentales de la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta (Rae, 2014).
- Prisión preventiva: Radica en privar la libertad de una persona acusada, antes del fallo condenatorio por el órgano judicial, basándose en la inseguridad de que el acusado evada el juicio, o el cumplimiento del posible fallo condenatorio, o la perturbación del proceso para evitar la averiguación de la verdad.
- Presunción de inocencia: Es un principio básico, fundamental que tiene el o los imputado (s) en un proceso o juicio penal, su principal propósito es de intervenir

o limitar la actuación del Estado, en cuanto al empleo del *Ius Puniendi*, es decir que este principio, protege al imputado frente a los posibles actos arbitrarios del Estado.

- **Proporcionalidad:** Constitucionalmente hablando el principio es igual que el principio de razonabilidad; es decir que tiene proporción o se ajusta a ella. Pero en sentido estricto se menciona del juicio de proporcionalidad, idoneidad y/o necesidad, es decir si se supera estos tres juicios entonces la medida deviene en proporcionada.

Formulación del problema

Problema general

¿Cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016?

Problema específico 01

¿De qué manera los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

Problema específico 02

¿De qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva?

Justificación del estudio

Justificación teórica

Valderrama (2016) menciona que Según que la justificación teórica se manifiesta ante preocupación del investigador por un determinado problema o tema de

investigación estudio, trata de profundizar el tema ya sea en uno o varios enfoques teóricos para que estos sean explicados ósea es la elección de ese enfoque para poder avanzar con el conocimiento planteado o encontrar nuevos tratamientos o explicaciones que bien pueden ser modificables o complementarios al conocimiento inicial (p. 140)

Es por ello la importancia de la presente investigación llenará y explicara un vacío teórico en el ámbito del derecho procesal penal, y de manera específica de los criterios judiciales como sustentan los jueces de Lima Norte, en relación al presupuesto del peligro de fuga y la valoración de sus elementos para determinar la la prisión preventiva.

Justificación Práctica

Valderrama (2016) dice que la justificación práctica es la exteriorización o declaración del autor o investigador por dar a conocer o acrecentar los nuevos conocimientos o el propósito de su investigación; para contribuir a la solución de los diversos problemas específicos que perjudica a cierto universo de la sociedad (p. 141).

En la investigación se evaluara la situación jurídica y dogmática de la práctica judicial en cuanto a los criterios del Juez, del presupuesto del peligro de fuga, en función a sus elementos como los arraigos de los procesados o imputados, la prognosis de la pena, el daño resarcible, el comportamiento del imputado frente al daño ocasionado y de la pertenencia a una organización criminal, ya que son elementos sumamente discrecionales, subjetivos que deben ser valorados objetivamente en sujeción a cánones de proporcionalidad y el respeto de principios y derechos; al momento de conceder la medida de la prisión preventiva, asimismo brindaremos conclusiones y recomendaciones para el buen uso de esta práctica judicial.

Justificación metodológica

Valderrama (2016) refiere que es el uso de las diversas metodologías y técnicas e instrumentos (encuesta, entrevista). Con el objeto de proponer un nuevo método o estrategia para así poder producir nuevos conocimientos, las mismas que sean válidas y confiable (p. 141).

De acuerdo al propósito en la presente investigación se empleará la formulación de instrumentos para medir las variables, como variable independiente los criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga, que antes de su aplicación las mismas, serán filtradas a través del juicio de expertos para después ser tamizados mediante la validez y confiabilidad.

Objetivos

Hernandez et al. (2014) mencionan que los objetivos de una investigación, es la intención del investigador en coadyuvar, a resolver un problema específico; existen otras investigaciones que tienen el propósito en demostrar una teoría, se sugiere que los objetivos de una investigación deben manifestarse con claridad, concretos, medibles, ciertos, es decir, susceptibles de conseguirlos (p. 37).

Quiere decir que sirven como guías del estudio, para su planteamiento es necesario utilizar verbos en infinitivos y hay que tenerlos presentes durante todo su proceso de desarrollo.

Lafuente & Marín (2008) menciona que el objetivo general de una investigación en principio debe reflejar la esencia del problema de investigación para ello es necesario expresarlo de acuerdo al título de investigación.

Valderrama (2016) para poder lograrlo es necesario que el enunciado sea claro y exacto ya que las conclusiones finales pueden recaer al logro o fracaso de la misma (p. 137). De acuerdo al título de la presente investigación la formulación del objetivo general es la siguiente:

Objetivo general

Establecer los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

Objetivo específico 01

Valderrama (2016) refiere que los objetivos específicos se deben derivar del objetivo general, lo mínimo a considerarse deben ser dos objetivos, los mismos deben guardar relación con la variable independiente y a la variable dependiente, estos deben ser específicos o concretos (p. 137). La formulación de los objetivos específicos son los siguientes:

Examinar la manera en que se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

Objetivo específico 02

Analizar la manera en que el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

Supuestos de investigación

Hernández (2004) refiere que las hipótesis o supuestos de investigación son respuestas anticipadas a las preguntas de investigación, teniendo una estrecha relación entre sí, utilizadas en los enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos, y estas requieren una contrastación científica sea práctica o teórica (p. 104).

Es decir, los supuestos o hipótesis científica sirven para responder o argumentar de forma alternativa un problema de investigación con base científica, según las respuestas al tema de estudio presentaremos los siguientes:

Supuesto general

Los criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016, resultan ser muy subjetivos, flexibles, estereotipadas, vulnerando derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia.

Supuesto específico 01

Los criterios del Juez, no se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

Supuesto específico 02

La manera cómo motivan los jueces las resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva resulta ser inadecuada, superflua, vulnerándose derechos fundamentales de los procesados.

II. METODO

2.1 Tipo de investigación

De acuerdo al propósito del presente tema de investigación, **el tipo de investigación es básica**, según Behar (2008) menciona que se le conoce como investigación teórica o fundamental, con su principal característica que parte del marco teórico, con el objetivo de formular o proponer nuevas teorías o cambiar las existentes (p. 19). Es decir, incrementar nuevos conocimientos científicos, sin que sea necesaria una comprobación práctica.

Valderrama (2016) menciona que también es conocida como investigación fundamental, exacta o pura, que se basa en principios, leyes, ocupándose del fenómeno de estudio, teniendo en cuenta sus resultados (p. 164).

Lo que se busca con el presente tema de investigación, es desarrollar o aumentar el conocimiento acerca de los criterios que tiene el juez momento de evaluar el peligro de fuga, para determinar la medida de prisión preventiva, con el propósito de incrementar el conocimiento sobre esta institución.

Tafur & Izaguirre (2015) menciona que el nivel de investigación será **descriptivo**, porque se encarga de medir y describir las características de hechos o fenómenos de investigación, mediante cuestiones por medio de las variables que escoja (p. 206).

Valderrama (2016) menciona que su objetivo principal es la descripción de los fenómenos a investigar, tal como se presenta en la realidad para ello se basa en la observación para poder especificar las propiedades relevantes para así poder medir y evaluar sobre sus dimensiones (p. 169).

2.2 Diseño de investigación

Barney & Strauss (1967) mencionan que la **Teoría Fundamentada**, es un método de investigación, es decir que la teoría emerge de los datos propuestos en la

investigación, para dar lugar a la revelación de aspectos relevantes de un determinado campo o área de estudio.

Strauss & Corbin (2002) mencionan que los problemas teóricos van a surgir de los datos que se obtengan abarcando análisis y desarrollo crítico de las teorías y doctrinas. (Hernández, J. *et al.* 2011, p. 7).

2.3 caracterización de sujetos

Valderrama (2016) considera que es la parte fundamental del enfoque cualitativo, porque es importante tener una estrategia para obtener la selección de los participantes, para ello es recomendable conocer su contexto y familiarizarse con el mismo (p. 318).

En el presente trabajo de investigación se cuenta para alcanzar con el objeto de investigación la presencia de expertos del derecho penal, tanto como magistrados y operadores jurídicos, para poder revelar aspectos fundamentales en base a la perspectiva de la institución del peligro de fuga, y su análisis del presupuesto del peligro de fuga.

Expertos en la materia	Grado	Especialidad	Cargo
Fiscales y Asistentes de función Fiscal	Magister o Doctores	Penal	Fiscal Provincial
Abogados	Magister o Doctores	Penal	Independiente

2.4 Población y muestra

Para delimitar **la población**, es el conjunto grande y completo de individuos; que contiene dos elementos espacio y tiempo Hernández et al (2014). Para efectos de la presente investigación se ha visto por conveniente realizar la investigación en el distrito judicial de Lima Norte.

Hernández et al. (2014) Mencionan que **la Muestra**, es el subconjunto de una población de estudio, es el proceso cualitativo, viene hacer el grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc. sobre ellos se deben de recolectar los datos o información sin que sea necesario la aplicación de estadística de la población que se estudia (p. 384).

De acuerdo al objeto de estudio, la muestra o unidad de análisis, se contará con 08 entrevistas a expertos en la materia y el análisis de 08 expedientes o estudio de casos del año 2016, del Juzgado penal de Turno de Lima Norte, y el carácter de selección de la muestra será la de muestra no probalístico, porque la elección de la muestra no depende de la probabilidad, sino dependen de las causas relacionadas con las características del presente trabajo o los propósitos del investigador.

2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad

Se aclara que no coexiste otro trabajo de investigación que la presente, por tanto, este tema resulta innovador y con gran significación social, la cual se encaminará considerablemente al término del desarrollo de la presente tesis de investigación.

Técnicas

Hernández et al. (2014) refieren que **la entrevista**, es la reunión de una persona (el entrevistador) y (el entrevistado) que a través de preguntas y respuestas se logra una comunicación íntima, flexible, y abierta produciéndose así una construcción de significados, por otro lado existen 03 tipos: las estructuradas,

semiestructuradas y no estructuradas, la primera, el entrevistador, realiza una su función siguiendo una guía de preguntas puntuales o específicas, la segunda, el entrevistador tiene la libertad de incluir preguntas adicionales para obtener más información y la tercera, se fundan en una guía general, en la cual el entrevistador tiene la flexibilidad para poder manejarlo (p. 403).

Valderrama (2016) es la fase que se trata de reunir toda la información en lo posible sobre conceptos relevantes o variables o características, etc. en relación a la materia de estudio; Es decir es realizar una estrategia para reunir o agrupar los datos.

Alonso (1995) refiere la técnica de la entrevista es un proceso comunicativo, en la cual el investigador extrae una determinada información relevante de una persona en ese sentido la entrevista es un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado (os), con el objetivo de obtener o recopilar información personal o de un tema en específico (pp. 225-240).

La técnica que se utilizó en la presente investigación, es la entrevista, que para ello se contó con la participación entre la entrevistadora y los entrevistados expertos en la materia como: Fiscales Provinciales, Fiscales Adjuntos, Asistentes de Función Fiscal, Abogados Litigantes Penalistas, que mediante preguntas y respuestas se logró una comunicación cálida e íntima, con el objeto de recopilar la opinión o juicio de valoración respecto del presente tema de investigación, para ello se empleó siempre un lenguaje propio y adecuado, generando un clima de confianza. Una vez que se obtuvieron estos datos, se procedió a procesarlas adecuadamente para su análisis posterior, que proporcionan información relevante a la problemática objeto de investigación.

Valderrama (2016) menciona que otra técnica es el **análisis de fuente documental, y análisis de casos** que son reunidos por el investigador como notas de campo y entrevistas grabadas, que estas se transcriben para su posterior análisis (p. 320); por parte de los autores Hernández et al. (2014)

mencionan que observador cumple una función activa en la indagación, pudiendo aceptar diferentes niveles de participación (p. 402).

Es decir como técnica nos permitió recolectar datos relevantes de **análisis doctrinal**, que permitió aportar y desarrollar teorías, principios, conceptos doctrinales sobre el objeto de investigación; análisis normativo, permitió analizar conglomerada mente normas nacionales y extranjera respecto de la prisión preventiva, y la valoración del presupuesto de peligro de fuga; análisis jurisprudencial nos permitió analizar un conglomerado de pronunciamientos por parte de los operadores de justicia, de Lima Norte, en relación al tema de la presente investigación.

Instrumentos

Valderrama (2016) refiere que **la guía de entrevista**, es la manera o forma práctica que utiliza el investigador con el propósito de recolectar y guardar o almacenar toda la información en lo posible, es decir seleccionar lógicamente los instrumentos (pp. 194-195).

La guía de entrevista, comprende de una serie de preguntas, las mismas estuvieron dirigidas a nuestros entrevistados o expertos en el tema de investigación, lo que permitió recolectar toda la información necesaria, para después procesarlas, y responder a los problemas formulados y supuestos jurídicos, lográndose nuevas teorías o conocimientos del tema materia de investigación.

Gaitan & Piñuel (1998) refiere que la ficha de **análisis de fuente documental y análisis de casos** es similar a la encuesta, este instrumento nos permitió mediante por un cuadro de doble entrada comparar distintas o diferentes fuentes bibliográficas.

La ficha de análisis doctrinal, nos posibilitó aportar y desarrollar teorías, principios, conceptos doctrinales sobre el objeto de investigación, como también

la ficha de análisis marco normativo, que nos ayudó a comparar normas en el ámbito nacional e internacional; por otra parte la ficha de análisis jurisprudencial, como instrumento nos proporcionó el poder analizar pronunciamientos por parte de los operadores de justicia, sobre el peligro de fuga, para determinar la prisión preventiva; y por último la ficha de análisis de casos, que nos permitió analizar el estudio de expedientes del Juzgado de Turno del distrito judicial de Lima Norte. Que nos permitió advertir una realidad en la práctica judicial acerca de los criterios de valoración, para determinar el presupuesto de peligro de fuga y por ende la imputación de la prisión preventiva a los procesados.

2.6 Método de análisis de datos

Valderrama (2016) refiere que **el método o juicio de los expertos** en relación a la materia de análisis de estudio, por lo tanto, existen o se pueden obtenerse de varias o distintas formas ya sean grupales o individuales o entre otros. Todo dependerá a juicio del investigador a inclinarse por ellas (p. 23). Este método nos permitió llegar a evidenciar los criterios acerca del presente tema de investigación.

Bisquerra (1998) explica que con **el método inductivo**, se analizan o examinan los fenómenos específicos en la cual se extraen deducciones o conclusiones de carácter general (p. 62); este método se utilizó para analizar datos o conceptos específicos sobre el peligro de fuga, como presupuestos de la prisión preventiva, para así generalizar algunos conceptos.

Bisquerra (1998) señala que **el método deductivo**, es cuando se extrae de una premisa general y se sacan conclusiones o deducciones de un caso particular o específico (p. 61), este método se utilizó para obtener datos o conceptos generales de diferentes fuentes científicas sobre el peligro de fuga, como presupuestos de la prisión preventiva, para así sacar conclusiones cortas o específicas de algunos conceptos.

Valderrama (2016) refiere que **el método analítico**, consiste en descomponer de un todo en partes, con propósito de observar relación, similitud, causas y efectos,

ósea es el análisis de la observación y revisión o examen de un determinado hecho para entender su esencia (p. 98), este método fue utilizado con el propósito de descomponer las variables de investigación en dimensiones siendo las mismas en indicadores, para poder analizar estrictamente o en profundidad el tema de estudio.

Valderrama (2016) refiere que **el método comparativo**, consiste en método de comparación sistemática de casos de análisis, este se aplica para el análisis de generalización empírica y de verificación de supuestos o hipótesis de investigación (p. 98); este método fue utilizado para la comparación de normas y jurisprudencias de distintos países, sobre el tema de investigación.

Método dogmático, se utilizó en el estudio de principios, normas jurisprudencias y fuentes bibliográficas científicas en relación con el objeto de estudio del tema de investigación

2.7 unidad de análisis: categorización

La categorización, viene hacer la agrupación temática, para ello es necesario hacerlos mediante los supuestos o unidades temáticas para que le deán sentido al presente trabajo de investigación en relación a los temas o datos vinculados con significados similares, para ello es necesario que se cuente con un respaldo bibliográfico.

Categoría

Los criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva

Sub-categorías

Criterio

Peligro de fuga

Prisión preventiva

Derechos fundamentales

Presunción de inocencia

2.8 Aspectos éticos

El desarrollo del presente tema de investigación, se han valorado las normas internas y las relacionadas a la formalidad de las citas de American Psychology Asociación (APA), todo ello en estricto respeto a los autores y a las normas de propiedad intelectual

Asimismo, en el presente tema de investigación se ha optado por respetar las opiniones o percepciones vertidas por los distintos autores ya sean en el ámbito político o social, y que en las entrevistas realizadas a los entrevistados, se ha solicitado todas las formalidades de su participación, como también se les informo que se les realizaría una grabación, siendo estas consentidas por los mismos entrevistados, también se les informo de los propósitos, fines y objetivos de tema de investigación antes formulado, como también el destino de las opiniones vertidas.

III. RESULTADOS

En el presente capítulo organizaremos y describiremos, los resultados de los datos recopilados, teniendo en cuenta los objetivos planteados en la presente investigación, los mismos que fueron obtenidos a través de los siguientes instrumentos de recolección de datos como la Guía de entrevista, Guía de análisis de casos, Guía de análisis normativo, Guía de análisis jurisprudencial.

3.1 Descripción de resultados de la técnica de guía de entrevista

A continuación, consignaremos los datos recopilados de las entrevistas, realizadas a Fiscales, Asistentes de Función Fiscal y Abogados Penalistas, que laboran cotidianamente en el Distrito Judicial de Lima Norte de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación.

Objetivo general

Cervera, Peceros, Fernández, Lujan y Ramírez (2017) mencionaron que los criterios del Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016, se centralizan principalmente en los arraigos y la gravedad de la pena.

Los criterios del juez respecto al arraigo domiciliario, consideran que muchas veces no se toman en cuenta la edad de los imputados ya que la mayoría oscilan entre los 18 a 25 años y que por su edad cronológica la mayoría serian solteros por lo tanto algunos alquilan o viven con sus padres, pues a pesar de las declaraciones juradas de domicilio que manifiestan tener para el Juez, no es suficiente, porque consideran que al tratarse de una persona soltera no hay nada que les vincule al lugar donde a la fecha domicilian, y que no genera certeza que al darle la libertad este se va a sujetar al proceso y que va a vivir en ese lugar.

Los entrevistados consideran que en pleno siglo 21, aún existe discriminación que por el hecho de ser joven y solteros se les considere que no tienen arraigo y que existe peligro de fuga, pues consideran que es desproporcional la valoración de este presupuesto.

Del arraigo familiar, refieren que existe controversia de aquellos jóvenes que no tienen carga familiar propiamente hijos o descendencia, los jueces consideran que existe peligro de fuga porque no hay responsabilidad ante otras personas, los entrevistados consideran que es ilógico tomándose en cuenta la edad de los mismos y que de la situación que recién se están forjando en la sociedad.

El arraigo laboral, es otro dilema debido que en nuestra sociedad es predominante la informalidad, el problema está al momento de acreditar este presupuesto procesal debido a que se presentan declaraciones juradas o constancias porque trabajan de forma independiente o eventualmente, pues los Jueces, consideran que son documentos simples sin valor fehaciente, al menos que los mismos cuenten con firmas legalizadas por Notario o Funcionario.

El problema es por la premura de las audiencias de prisión preventiva, que implica recabar todos los medios de prueba para acreditar este presupuesto, pues es complicado realizar ese tipo de protocolos en poco tiempo, a comparación del Ministerio Público que tiene la potestad de solicitarlo a las instituciones y con colaboración de la policía para así poder recabar los medios probatorios tanto de cargo como de descargo.

Como también la judicatura puede solicitarlo realizando un cruce de información con las distintas instituciones como es de ESSALUD, SUNAT, MINISTERIO DE TRABAJO, PNP, etc. que el Juez los requiera antes o durante la audiencia consulte en línea para poder acreditar este presupuesto procesal.

Otro criterio es la gravedad de la pena, consideran que este presupuesto es de evaluación automática o mecánica que solo basta que el delito cometido supere el límite de 04 años para que se determine el riesgo de fuga del imputado, pues no haciéndose una doble valoración acerca de las circunstancias del caso concreto.

En la práctica judicial consideran que existen diversos criterios para evaluar estos presupuestos debido al amplio ámbito de discrecionalidad del Juez, consideran que muchos se remiten a lo que presenta en la carpeta fiscal, y que son mínimas las veces que toma en cuenta lo contrastado por la defensa técnica, pues

advirtiéndose una práctica arbitraria la evaluación del presupuesto del peligro de fuga, basándose en meras presunciones y no en criterios objetivos.

Martell, Rojas y Chafloque (2017) refirieron que los criterios al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016, son todos los presupuestos considerados en el art. 269 del CPP.

Los criterios que utilizan los Jueces, sobre el arraigo familiar, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016, lo realizan en base a la manifestación del imputado y a la constatación domiciliaria realizado por la policía, consideran que no es arraigo el hecho de que una persona alquila y recién se ha mudado, y que la dirección que figura en su DNI, es distinta a lo manifestado por el imputado, pues se denota la inexistencia de este presupuesto por no tener un domicilio fijo o permanente.

Arraigo familiar, que es importante acreditar que si tiene familia o dependientes es necesario acreditarlo con documentos, que en el caso de aquellos que no tienen familia en relación a las personas solteras deben acreditar que tienen dependientes como padres o hermanos.

Arraigo laboral es necesario acreditar con un certificado de trabajo o algún documento que acredite que efectivamente labora para una empresa o que se dedica a una determinada actividad.

De la gravedad de la pena, consideran que al ser más alta la pena es más probable que el imputado eluda la acción de la justicia, debido al temor natural de perder su libertad individual por un largo periodo de tiempo y también verificar que al momento de la intervención de la policía el imputado opuso resistencia para su captura para determinar el peligro de fuga

De la magnitud del daño, en el caso del Delito del Tráfico Ilícito de Drogas, el daño causado es directamente a la salud física y psicológica de la persona humana con efectos irreversibles, como a la estructura social, política y económica del Estado.

Objetivo específico 01

A continuación, consignaremos los datos recopilados de las entrevistas, realizadas a Fiscales, Asistentes de Función Fiscal y Abogados Penalistas, que laboran cotidianamente en el Distrito Judicial de Lima Norte, de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación.

Cervera, Peceros, Fernández y Lujan (2017) refieren que una medida limitativa de derechos en especial la prisión preventiva, implica una exigencia estricta y excepcional al momento de su evaluación, pues eso es en la teoría porque en la práctica judicial en el distrito judicial de Lima Norte, esta medida es utilizada como si fuera la única medida cautelar o la regla general, haciendo pues un uso excesivo de la misma.

Debido a que los criterios del Juez, no se adecuan al test de proporcionalidad, al momento de valorar la medida a imponer según el caso concreto, pues no existe un criterio ponderativo para equilibrar la imposición de esta medida con eficacia procesal y la restricción de un derecho fundamental, asimismo no se tiene en cuenta las circunstancias y la personalidad del imputado.

Asimismo, se puede observar que algunas Jueces, son influenciados ya sea por la presión mediática, corrupción de funcionarios entre otros, que de una u otra manera influyen en su decisión.

Ramírez, Martell, Rojas y Chafloque (2017) mencionan que los criterios del Juez, son adecuados al test de proporcionalidad, porque entre el conflicto de dos derechos, se debe de ponderar primero la seguridad de los ciudadanos frente a la libertad de una persona que ha incurrido en su agravio. Y por lo general la

imposición de una medida de prisión preventiva deviene ser idónea para el cumplimiento de tal finalidad.

Objetivo específico 02

Martell, Rojas, Cervera, Peceros, Fernández y Lujan (2017) consideran que en el ámbito del Derecho Penal, este principio es muy importante porque aquí en este campo se va a determinar la restricción de un derecho básico o fundamental como es la libertad personal. Entonces esta debe estar revestida de una debida motivación con la finalidad de dar a conocer sobre las razones que le llevo al Juez, a determinar tal decisión.

Pues esta resulta contradictoria en la práctica judicial, advirtiéndose una carencia de una debida motivación en relación a los autos de prisión preventiva que muchas veces lo hacen en remisión a lo que indica la carpeta fiscal, y no lo fundamentan en base a criterios concretos u objetivos.

Ramírez y Chafloque (2017) consideran que hace un año se viene implementando progresivamente el CPP, de 2004, que a raíz de su vigencia y sus modificatorias, pues a pesar de su incorporación en el distrito judicial de Lima Norte. Los Jueces, realizan una debida motivación pese a la reforma y a las audiencias que se realizan en tiempo real y de forma oral, pues cómo toda figura se viene implementando gradualmente podría darse en mínimos casos la posibilidad de argumentos exagerados, la cual ya se está implementando poco a poco pues cualquier ciudadano que considere que la decisión judicial le perjudica puede recurrir a otras instancias para su evaluación en salvaguarda de sus derechos fundamentales.

3.2 Descripción de resultados de la técnica de análisis de casos

En este acápite presentaremos un análisis de 10 autos de prisión preventiva, realizado por los Jueces del Juzgado Penal de Turno en el Distrito Judicial de

Lima Norte del año 2016, en concordancia con los objetivos planteados en la presente investigación.

Objetivo general

Expedientes N° 2362-2016, 4438-2016, 4262-2016, 1809-2016, 854-2016, 4731-2016, 4513-2016 y 4825-2016 (2017) se evidencian que para algunos Jueces, el criterio utilizado del arraigo domiciliario y familiar, se acredita por la sola constatación domiciliaria a nivel policial, en los casos de aquellos imputados que alquilan por un tiempo mínimo de un mes hasta un año la judicatura considera que no cumple tal requisito procesal, debido a que no tiene domicilio fijo y que este puede variar en cualquier momento.

Existe un problema en cuanto al criterio de valoración del arraigo laboral, no se acredita este requisito con la presentación de una constancia o contrato de trabajo simple u otros documentos, sino que este debe acreditar personería jurídica en el caso de las empresas formales y que sus representantes cuenten con los respectivos poderes vigentes al momento de expedir dichos documentos.

Asimismo, en el caso de los independientes es necesario presentar documentación con firmas legalizadas por un Notario Público o firmas certificadas por un Funcionario Público. Por otro lado, existen otros jueces que consideran contratos o constancias de trabajo simples, pues no existe unanimidad de criterios.

En cuanto a la gravedad de la pena, en la mayoría de los casos es de aplicación automática, sobre la base que la tipificación del delito, basta que sea suficiente que la pena supera los cuatro años ya se considera la advertencia de un peligro de fuga por parte del procesado, de la magnitud del daño causado, pues en los casos del Delito del Tráfico Ilícito de Drogas, queda demostrado el grave daño que se genera a la sociedad este es un criterio para determinar la existencia del peligro de fuga.

Del comportamiento del imputado antes y durante el procedimiento, el juicio de valor que tienen los Jueces, es que el hecho que el imputado al momento de su captura puso resistencia es señal objetiva que puede fugarse de la justicia, asimismo en cuanto a la reincidencia demuestra que el imputado hace del delito su modo de vida representando un peligro a la sociedad.

Entonces los criterios del juez al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva, resultan ser muy flexibles, discrecionales hasta estereotipados.

Expediente N° 4501-2016 y 4578- 2016 (2017) se advierten que los Jueces, no motivan adecuadamente sus juicios de valoración con respecto a cuáles serían las razones que les motivo a determinar la existencia del peligro de fuga para determinar la afectación de un derecho fundamental como es la libertad individual o ambulatoria.

Objetivo específico 01

Expedientes N° 4825-2016 y 2362-2016 (2017) se puede apreciar que los criterios que utilizan los Jueces, si se adecuan al test de proporcionalidad, debido a que la medida de prisión preventiva, es la más idónea, y resulta ser legítima porque cumple su finalidad de aseguramiento procesal, es necesaria porque es imprescindible y no sustituible con otra medida de semejante eficacia y proporcional porque entre la medida analizada y la afectación del derecho fundamental se basan en limitar la totalidad de consecuencias negativas para los agraviados, el normal desarrollo del juicio y la eficacia de una futura sentencia condenatoria por lo tanto al estar en prisión impediría tal injerencia de este en el proceso penal.

Expedientes N° 1809-2016, 4731-2016, 4262-2016, 4513-2016 4438-2016 y 854-2016 (2017) se señalan que los criterios utilizados por los Jueces, no se adecuan al test de proporcionalidad, si bien es cierto que la medida aplicada resulta idónea porque tienen un fin constitucional, pues no resulta necesaria porque la medida

aplicada es de ultima ratio y no la regla, porque existen otras medidas accesorias de semejante eficacia, por lo tanto no existe una ponderación entre la medida aplicada y la afectación del derecho fundamental.

Esto es debido a la inexistencia de medios probatorios que permitan de manera objetiva afirmar una alta probabilidad del peligro de fuga, y no solo en meras suposiciones, además se advierte que no se tiene en cuenta el principio de la presunción de inocencia, ya que es un derecho básico de toda persona a que se presuma inocente hasta que se pruebe lo contrario de acuerdo a ley, con las garantías necesarias para su defensa, entonces si bien cierto la medida es legítima pero no resulta ser la más adecuada y necesaria para poder lograr el fin constitucional, por esas consideraciones esta medida resulta ilegítima o desproporcional.

Expedientes N° 4501-2016 y 4578- 2016 (2017) se demuestran una clara afectación de la vulneración de derechos fundamentales ya que las mismas no tienen sustento o respaldo de las razones para que expliquen tal resultado de la imposición de una medida de restricciones de derechos.

Objetivo específico 02

Expedientes N° 4731-2016, 4825-2016, 4262-2016 y 4513-2016 (2017) se determina que los Jueces, motivan de forma adecuada sus resoluciones ya que plasman de forma expresa la justificación jurídicamente razonada de su decisión, en la cual expresan sobre la valoración de los hechos, pruebas y normatividad vigente y las circunstancias al momento de determinar el peligro de fuga.

Expedientes N° 1809-2016, 4438-2016, 2362-2016 y 4438-2016 (2017) señalan que los Jueces, no motivan de manera adecuada las resoluciones al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva, porque al momento de valorar los medios de pruebas y las circunstancias, los Jueces, en su mayoría escogen las más favorables o las adecuan y en extremo descartan las

contrarias pues esta práctica con lleva a una distorsión sistemática de su propio razonamiento.

Porque ante la existencia de dos hipótesis planteadas tanto por la fiscalía y la defensa técnica, el magistrado no contrasta las pruebas tanto de cargo como de descargo de una manera motivada y rigurosa.

Expediente N°: 4501-2016 y 4578-2016 (2017) señalan que los Jueces, no motivan de forma adecuada sus resoluciones porque si bien es cierto el juez, está en la obligación de poner en conocimiento al ciudadano sobre los hechos, motivos y normas, en que se basó su decisión judicial, para descartar cualquier indicio de arbitrariedad, para no vulnerar el derecho a un debido proceso.

Pues esta expresión de interiorización interna y externa debe hacerlo en forma expresa, pues en los expedientes analizados se advierte que existe una falta de motivación de las resoluciones por parte de los jueces, es decir que los magistrados no han expresado la exposición de su razonamiento, aun cuando este hubiera sido impecable, pues esta omisión resulta ser arbitraria su imposición, generando una total escases de credibilidad y verosimilitud en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

3.3 Descripción de resultados de la técnica de análisis jurisprudencial

En este acápite se realizará un análisis de las jurisprudencias más resaltantes como las jurisprudencias a nivel nacional e internacional de acuerdo con los objetivos planteados en el presente tema de investigación.

Objetivo general

De acuerdo con lo establecido con la Casación N° 631-2015 - Arequipa, aquí se presenta los criterios del Juez, que debe tener en cuenta para determinar la existencia del peligro de fuga, este precepto legal se basa acerca de los criterios

de valoración del arraigo que se entiende que es el establecimiento de una persona que se encuentra vinculada ya sea a personas o cosas.

Desde una perspectiva jurídica se debe tener en cuenta tres dimensiones 1) que se vincula en la posesión del bien, es decir que exista un domicilio, una vivienda, una ubicación, o dirección conocida; 2) El arraigo familiar son los vínculos habituales, lazos familiares con el acusado 3) Arraigo laboral, relacionado con la subsistencia u ocupación del acusado que provengan de una trabajo desarrollado en el país, se requiere una valoración en conjunto que si de concurrir estas circunstancias pues, desincentivan el peligro de fuga del imputado, otro criterio relevante como es la moralidad del imputado, basado en la carencia de antecedentes penales.

El criterio en relación a la gravedad de la pena, podría ser relevante su valoración, pero si no constan elementos de convicción respecto del riesgo procesal no se puede dictar automáticamente una medida de limitación de derechos como la de la institución objeto de estudio, asimismo otro criterio que la presunción de un peligro de fuga no se puede basar por la sola condición de que el imputado sea extranjero pues sería discriminatorio, imponerle esta medida por razón de ser extranjero.

Según la Casación N° 626-2013 - Moquegua, establece como jurisprudencia acerca de la magnitud del daño causado, pues este criterio es criticado, ya que incorpora aspectos de responsabilidad civil a las medidas de limitación de derechos de carácter personal, es decir que el resarcimiento del agraviado poco tiene que ver con el peligro fuga, el criterio adoptado aunque un poco confuso es que se debe valorar atendiendo a una correcta interpretación, sobre la actitud del imputado después de haber realizado el hecho delictivo.

Asimismo se exhorta analizar acerca del comportamiento del imputado durante o después de la comisión del hecho delictivo, es decir de aquel que consciente de la conducta desplegadas escapa o fuga del lugar de los hechos, como también el hecho que durante el proceso u otro anterior que se le impuso una medida

restrictiva de derechos, pues no autoriza al Juez imponer, por su solo mérito, sino de una valoración en conjunto de todas las circunstancias.

El criterio de la pertenencia a una organización criminal, no basta con sindicarse la existencia de una organización criminal, sino de poder evaluar sus elementos o componentes como la pertenencia a una organización criminal, mantenerse de forma permanente, pluralidad de agentes, como la relación del imputado. Asimismo, se debe motivar en estricto qué peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta organización, o sea una doble valoración.

Objetivo específico 01

Según el Exp. N.º 3357-2003-HC/TC, establece que la medida de prisión provisional constituye en restringir derechos fundamentales, como la libertad personal, es por esos motivos que esta medida no puede constituirse como la regla general, sino lo contrario como una medida excepcional de carácter subsidiario, razonable y proporcional.

Exp. N.º 1091-2002-HC/TC en su pronunciamiento refirió que el sólo propósito por parte del imputado de obstaculizar y ocultar pruebas pues no da lugar a que el juzgador busque otras medidas alternas de menor intensidad que la prisión preventiva. Consideramos que es un criterio arbitrario porque la sola presencia de este elemento anula la idoneidad de cualquier otra medida coercitiva

Asimismo, la CIDH, ha establecido en el art. 7. 3º, de que ninguna persona puede ser sometido a detención por prácticas ilegales o arbitrarias, por lo tanto es importante hacer un equilibrio entre la medida a imputar y el peligro procesal.

Sentencia de la CIDH, caso Gangaram Panday Vs. Surinam, se ha establecido que ninguna persona puede ser sometida a una detención por causas y métodos legítimos, a pesar que estos puedan calificarse como incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales de las personas, por ser desproporcionales

Objetivo específico 02

El Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116, ha establecido como doctrina legal que: La motivación puede ser escueta, concisa, para ello es necesario que sea analizada según el caso concreto, que permita conocer, aun de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. Basta, entonces, que el órgano jurisdiccional exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan conocer las líneas generales que fundamentan su decisión.

3.4 Descripción de resultados de la técnica de análisis normativo

En este acápite se realizará un análisis normativo de acuerdo con los objetivos planteados en el presente tema de investigación.

Objetivo general

Res. Administrativa N° 325-2011, circular de prisión preventiva, aquí se precisa con mayor claridad sobre la valoración del presupuesto del peligro de fuga.

Pues el criterio del arraigo, no es requisito fijo sino relativo, es relevante la expresión existencia o inexistencia de arraigo, pues se considera que este enunciado requiere serios controles en el plano lógico y experimental. Pues si partimos que toda persona, hasta un indigente, tiene algún tipo de arraigo.

Entonces un error frecuente en la práctica judicial, es sobre la existencia o inexistencia del arraigo cuando el imputado tiene domicilio conocido, trabajo, familia, etc. Tal juicio de valoración no se sostiene desde la perspectiva del DPP, pues la norma procesal vigente no lo exige sino lo que si se impone es la ponderación de la calidad del arraigo.

Otro ejemplo es cuando la conducta desplegada del imputado en el proceso penal, a pesar de tener domicilio fijo o conocido o trabajo, pues su conducta es

contraria al desarrollo del proceso; entonces esta calidad de arraigo no sería suficiente para enervar el peligro procesal.

El criterio a utilizar debe ser relacional analizando caso por caso, de suerte es posible determinarse la inexistencia del peligro de fuga, como en otros no. En consecuencia, no puede invocarse, la existencia o inexistencia de arraigo, sino debe analizarse la calidad del mismo y su relación con otros factores según el caso concreto.

El criterio de la gravedad de la pena, se podría decir que no es lo mismo la tentativa imposición de una pena privativa de libertad de seis años que de una de veinte años, desde una inferencia por las máximas de la experiencia esta pronóstico puede influenciar radicalmente la conducta procesal del imputado.

Por ello se requiere que los Jueces valoren cada caso concreto; Sin embargo, no se debe aplicar esta medida restrictiva de derechos en todos los supuestos, cuando la pena supere el límite penológico, asimismo la doctrina ha establecido que la pena no puede ser el único criterio que justifique la prisión preventiva, sino que esta debe ser analizado en conjunto.

Con respecto a la pertenencia del imputado a una organización delictiva para entender la existencia de un peligro procesal, se debe considerar desde el punto de las estructuras organizadas que por lo general la tendencia es generar estrategias y métodos para beneficiar la fuga de sus integrantes y la obstaculización de las fuentes de prueba mediante amenaza, coacción, secuestro, compra, muerte de testigos, etc.

IV. DISCUSSION

Objetivo general

De los entrevistados del distrito judicial de Lima Norte

De los entrevistados, la mayoría señalaron que los criterios del juez, son muy flexibles, discrecionales, no son unánimes al momento de evaluar el peligro de fuga principalmente existen muchas contrariedades al momento de acreditar el arraigo de domicilio, familiar, laboral, debido a diferentes factores como la edad cronológica de los imputado entre los 18 a 25 años, el estado civil y la cultura de informalidad laboral, asimismo la gravedad de la pena es de aplicación automática.

Estas conclusiones son concordantes con Villegas (2016) que no hay criterios tasados sobre este presupuesto, sino que la norma penal se limita en fijarlos, no existe un análisis automático al contrario esa valoración se deja bajo la discrecionalidad del Juez, además debe motivar el fallo de su decisión.

En cambio, un grupo minoritario de los entrevistados señalaron que los criterios del Juez, son todos los considerados en el art. 269º del CPP, que los criterios del arraigo domiciliario y familiar, se evalúan en base a la manifestación del imputado, constatación policial, y que el imputado tenga familia o dependientes con documentos fehacientes.

Este criterio resulta antagónico con la postura de Llobet (2009) porque permite deducir una flexible y amplia discrecionalidad por parte del Juez, que puede dar lugar a criterios arbitrarios, limitando la valoración de otros elementos o circunstancias.

Análisis de casos o de expedientes del juzgado penal de turno del distrito judicial de Lima Norte

De la mayoría de los casos analizados coinciden con los entrevistados, que los criterios son flexibles en especial al momento de valorar el arraigo laboral para

algunos es necesario acreditar este requisito con documentos con firmas legalizadas o certificadas, en cambio otros jueces consideran contratos o constancia simples, pues no hay un criterio uniforme sino flexible.

Estas opiniones ratifican lo dicho por López (2011) pues cuestiona que, en una cultura de informalidad, es un problema demostrar el arraigo laboral siendo riesgo latente y pérdida de tiempo, la crítica es que el Juez, puede hacer cruce de información con las distintas instituciones para su valoración de esta.

Del análisis de casos la minoría de los Jueces simplemente no motivan, no expresan sus juicios de valoración de la existencia del peligro de fuga para determinar la afectación de un derecho fundamental como es la libertad individual o ambulatoria.

Este resultado es contrario a lo mencionado por Bedón (2010) que refiere la fundamentación de las resoluciones judiciales, son garantías básicas de un debido proceso, exigiendo a los órganos judiciales que deben fundamentar de forma clara y precisa los presupuestos o fundamentos de su imposición, que no basta con alegar el peligro de fuga, sino que hay que enumerarlas, expresarlas, describirlas, explicarlas, siendo estas objetivas y así descartar cualquier arbitrariedad.

Posición personal

De acuerdo a los datos revelados en los acápites anteriores, los criterios de los Jueces, al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte, resultan ser criterios muy flexibles, discrecionales, estereotipados no son unánimes en la práctica judicial.

Existen muchas contrariedades al momento de acreditar el arraigo de domicilio, familiar, laboral, debido a diferentes factores como la edad cronológica, el estado civil de los procesados y la cultura de informalidad laboral.

Estamos de acuerdo con la circular de prisión preventiva, que este criterio no es requisito fijo sino relativo, acerca de la expresión existencia o inexistencia de arraigo, se requiere serios controles en el plano lógico y experimental, en el sentido que toda persona, hasta un indigente, tiene algún tipo de arraigo, pues lo que se exige no es revelar existencia o inexistencia de esta sino la ponderación de la calidad del arraigo, porque alguien puede tener todos estos requisitos pero eso no deslinda que se evidencia el peligro de fuga por ejemplo.

De la gravedad de la pena, en la práctica judicial es de aplicación automática, no se hace una doble valoración entre el límite penológico y las circunstancias. Estamos de acuerdo con la Casación N° 631-2015-Arequipa, que el criterio de la gravedad de la pena, podría ser relevante su valoración, pero si no constan elementos de convicción objetivos razonados respecto del riesgo procesal no se puede dictar automáticamente.

Del daño resarcible cuestionamos, porque aspectos de responsabilidad civil se insertan como requisitos para aplicar medidas de restricción de derechos de carácter personal, cuando hay vías idóneas para su eficacia, consideramos que es inconstitucional este presupuesto. Esta postura se ratifica con la Casación N° 626-2013-Moquegua, es decir que el resarcimiento del agraviado poco tiene que ver con el peligro fuga.

De la conducta procesal del imputado, consideramos que no son indicios objetivos sino estereotipados, por el hecho de que el imputado fugue después de cometer el hecho delictivo del lugar de los hechos, y que este tiene procesos abiertos o concluidos para determinar la existencia del peligro de fuga, pues este criterio no se puede aplicar por su solo mérito, sino de una valoración en conjunto de todas las circunstancias.

Consideramos que este criterio es muy estereotipado considerar riesgo de fuga por la sola pertenencia del imputado a una organización delictiva, esta deberá entenderse como una estructura organizada que pueden generar estrategias y métodos a través de amenaza, coacción, secuestro, compra, muerte de testigos,

etc., además todos los demás elementos en conjunto. Esta postura se respalda por la Casación N° 626-2013-Moquegua, no basta con sindicar la existencia de una organización criminal, sino que se debe evaluar sus elementos o componentes.

Con lo expresado líneas atrás podemos ratificar nuestro supuesto general, que los criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el año 2016, resultan ser muy subjetivos, flexibles, estereotipadas, vulnerando derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia.

Objetivo específico 01

De los entrevistados del distrito judicial de Lima Norte

De la mayoría de los entrevistados señalaron que los criterios del Juez, no se adecuan al test de proporcionalidad, no existe un criterio ponderativo para equilibrar la imposición de esta medida y la restricción de un derecho fundamental, asimismo no se tiene en cuenta las circunstancias y la personalidad del imputado y sobre todo no se parte del principio de presunción de inocencia.

Este criterio es concordante con Villegas (2016) que para poder considerar que una medida de coerción es proporcional, es necesario superar el test de proporcionalidad, que se descomponen en juicio de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad de lo contrario no se adecuaría a este principio y la medida sería arbitraria.

De los entrevistados la minoría mencionan que los criterios del Juez, son adecuados al test de proporcionalidad, porque consideran ante el conflicto de dos derechos, se debe de ponderar la seguridad de los ciudadanos frente a la libertad de una persona que ha incurrido en su agravio, y que la medida de prisión preventiva resulta ser la más idónea para el cumplimiento de tal finalidad.

Es cuestionable por Sanguine (2003) aclarando que el principio de proporcionalidad, al momento de aplicar la prisión provisional, tiene como finalidad solucionar una controversia entre la libertad individual y la seguridad del individuo, es decir que el Juez, debe equilibrar o delimitar un punto medio no matemáticamente hablando sino evaluando desde de una jerarquía de valores o principios constitucionales, como el principio supremo del favor libertatis.

Análisis de casos o de expedientes del juzgado penal de turno del distrito judicial de Lima Norte

Se llegó a concluir que la mayoría de los criterios utilizados por los Jueces, no se adecuan al test de proporcionalidad, si bien es cierto que la medida aplicada resulta idónea porque tienen un fin constitucional, pues no resulta necesaria porque la medida aplicada es de ultima ratio y no la regla, porque existen otras medidas accesorias de semejante eficacia, por lo tanto, no existe una ponderación entre la medida aplicada pues resulta ilegítima o desproporcional. Asimismo, una minoría de los casos analizados los Jueces, no motivan las razones de su decisión simplemente imponen esta medida gravosa, se demuestran una clara afectación de la vulneración de derechos fundamentales

Si evidencia la vulneración de derechos fundamentales de los procesado, así lo ratifica la CIDH, ha establecido en el art. 7. 3º, de que ninguna persona puede ser sometido a detención por prácticas ilegales o arbitrarias, por lo tanto, es importante hacer un equilibrio entre la medida a imputar y el peligro procesal.

Del análisis de casos se llegó a concluir que la minoría los criterios de los Jueces, se adecuan al test de proporcionalidad, porque entre la medida analizada y la afectación del derecho fundamental se basan en limitar la totalidad de consecuencias negativas para los agraviados.

Siendo concordantes con Villegas (2016) que refiere que el Juez, debe imponer entre todas las medidas del ordenamiento jurídico la medida que resulten idóneas

utilizando la menos gravosa o de menor grado de limitación de los derechos fundamentales de la persona.

Posición personal

De acuerdo a los resultados revelados se concluye que los criterios de los Jueces, no se adecuan al test de proporcionalidad, que la aplicación de medida no es de ultima ratio y si no en la práctica judicial es la regla general, es mecánica, porque no utilizan otras medidas accesorias de semejante eficacia, por lo tanto, no existe una ponderación entre la medida aplicada, pues esta valoración resulta ilegítima o desproporcional.

Esta opinión se ratifica lo dicho Villegas (2016) refiere para que una limitación de derechos fundamentales sea legítima es necesario que sea proporcional entre la medida examinada y el grado de afectación del derecho fundamental, es decir un juicio de valor ponderativo de intereses contrapuestos.

Para finalizar se puede ratificar el supuesto específico 02, acerca de los criterios del Juez, no se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

Objetivo específico 02

De los entrevistados del distrito judicial de Lima Norte

De los entrevistados la mayoría consideran los Jueces, motivan de una manera inadecuada advirtiéndose una carencia de una debida motivación, muchas veces lo hacen en remisión a lo que indica la carpeta fiscal, y no lo fundamentan en base a criterios concretos u objetivos.

Estamos de acuerdo con Bedón (2010) que señala que fundamentación de las resoluciones judiciales, son garantías básicas de un debido proceso, exigiendo a los órganos judiciales que deben fundamentar de forma clara y precisa los

presupuestos o fundamentos de su imposición, que no basta con alegar el peligro de fuga, sino que hay que enumerarlas, describirlas, explicarlas, siendo estas objetivas y así descartar cualquier arbitrariedad.

En cambio, la minoría de los entrevistados consideran que Los Jueces, realizan una debida motivación pese a la reforma y las audiencias que se realizan en tiempo real y de forma oral, pues cómo toda figura se viene implementando gradualmente podría darse en mínimos casos la posibilidad de argumentos exagerados, pues cualquier ciudadano que considere que la decisión judicial le perjudica puede recurrir a otras instancias para su evaluación en salvaguarda de sus derechos fundamentales.

Este criterio es cuestionable según lo referido por Villegas (2016) pues que no se trata, que el Juez, explique o que ponga de manifiesto esos motivos, sino para determinar si son aceptables desde la óptica del ordenamiento jurídico, que bajo esta óptica es rechazable esa postura.

Análisis de casos o de expedientes del juzgado penal de turno del distrito judicial de Lima Norte

Se evidencia que la mayoría de los Jueces, no motivan de manera adecuada las resoluciones al momento de evaluar el peligro de fuga, porque al momento de valorar los medios de pruebas y las circunstancias la mayoría escogen las más favorables o las adecuan y en extremo descartan las contrarias, pues esta práctica con lleva a una distorsión sistemática de su propio razonamiento, como también alguno no se pronuncian o no motivan sus resoluciones siendo arbitrarias su imposición, generando una total escases de credibilidad y verosimilitud en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

Señalan el análisis de casos que la minoría de los Jueces, motivan de forma adecuada sus resoluciones ya que plasman de forma expresa la justificación jurídicamente razonada de su decisión, en la cual expresan sobre la valoración de

los hechos, pruebas y normatividad vigente y las circunstancias al momento de determinar el peligro de fuga.

Pues esto no se cumple, según lo señalado por Del Rio (2016) que la motivación de las decisiones de la autoridad judicial, son la base principal de un ordenamiento jurídico, porque es la única manera de comprobar en sentido estricto, los juicios de valoración para determinar que la medida adoptada es proporcional, en el caso estudiado existe una clara vulneración de derechos fundamentales.

Posición personal

Consideramos que en la práctica judicial motivan los Jueces de una manera inadecuada motivan, las resoluciones para determinar el peligro de fuga, debido a que no hay una valoración estricta de los medios de prueba ofrecidos por las partes procesales, muchas veces escogen las más favorables o las adecuan y en extremo descartan las contrarias, e imponen la medida más delicada de todo el ordenamiento jurídico, pues esta mala práctica distorsiona sistemática de su propio razonamiento.

Consideramos que la contrastación de pruebas en contrario es indispensable para justificar los fundamentos de su decisión, que el Juez valore no solo las hipótesis positivas, sino también las hipótesis negativas para poder otorgar una decisión final, hora bien esta fundamentación no se requiere de sea una argumentación extensa, ni tampoco escueta, sino que sea suficiente, lo que rechazamos en todos los extremos que exista una falta de motivación de forma expresa del órgano jurisdiccional, que en algunos de los autos si se advierte esta mala práctica. Vulnerándose derechos del debido procedimiento entre otros.

Con lo referido podemos ratificar nuestro supuesto específico 2, que la manera cómo motivan los jueces las resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva resulta ser inadecuada, superflua, vulnerándose derechos fundamentales de los procesados.

V. CONCLUSION

Primera: Se concluye que la prisión preventiva, es la medida más irreflexiva que se le puede interponer aun procesado durante un proceso penal, a través de una resolución judicial estrictamente motivada con carácter provisional, basados en la eficacia del proceso penal, para su determinación se debe evaluar de forma conjunta sus presupuestos, siendo el más controversial el peligro de fuga. La investigación refiere que el criterio del Juez, al evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva, resultan ser criterios muy flexibles, discrecionales, estereotipados que no son unánimes al momento de acreditarlos, el más debatible son los arraigos, debido a diferentes factores de valoración como la edad cronológica, el estado civil de los procesados y la cultura de informalidad laboral, aunado la mala práctica judicial al tratar de revelar la existencia o inexistencia de esta, cuando lo correcto es la ponderación de la calidad del arraigo; La gravedad de la pena en la actualidad es de aplicación automática, lo correcto es hacer una doble valoración entre el límite penológico y las circunstancias; Del daño resarcible, pues se rechaza categóricamente ya que es inconstitucional, que aspectos de responsabilidad civil no deben ser requisitos para aplicar medidas restrictivas de derechos fundamentales; De la conducta del imputado, no se debe aplicarse por su solo mérito, sino de una valoración en conjunto, de la existencia de una organización criminal, debe evaluarse sus elementos o componentes.

Segunda: Asimismo, se concluye que los criterios del Juez, no se adecuan al test de proporcionalidad, porque no existe una ponderación entre la medida examinada y el grado de afectación del derecho fundamental, debido a la inexistencia de medios probatorios que permitan de manera objetiva afirmar una alta probabilidad del peligro de fuga, sustentándose en meras suposiciones, así mismo no se toma en cuenta el principio de la presunción de inocencia, ya que es un derecho básico de toda persona a que se presuma inocente hasta que se pruebe lo contrario de acuerdo a ley, entonces si bien cierto la medida es legítima pero no resulta ser la más adecuada y necesaria para poder lograr el fin constitucional, además obvian otras medidas accesorias a la prisión preventiva como el pago de una fuerte caución o comparecencia restrictiva, etc. Por esas consideraciones esta medida resulta ser ilegítima o desproporcional.

Tercera: Para finalizar los Jueces, motivan de una manera inadecuada sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva, por falta de valoración estricta de los medios de prueba, es decir la contratación de pruebas en contrario, que el magistrado valore no solo las hipótesis positivas, también las hipótesis negativas ofrecidos por las partes procesales, se evidencia que muchas veces escogen las más favorables o las adecuan y en extremo descartan las contrarias, e imponen la medida más delicada de todo el ordenamiento jurídico, pues esta mala práctica distorsiona sistemáticamente su propio razonamiento, asimismo se ha evidenciado autos con falta de motivación, la cual rechazamos en todos sus extremos resoluciones sin estar debidamente motivados de forma expresa por el órgano jurisdiccional, ya que se vulneraría el derecho a un debido procedimiento y otros.

VI. RECOMENDACION

Primera: Se recomienda a todos los operadores de justicia, antes de aplicar la medida de prisión preventiva, basados en el peligro de fuga, que utilicen criterios razonables, objetivos, proporcionales, así mismo invoco a que se utilicen instrumentos en línea, que los Jueces, puedan tener acceso para consultar con las instituciones públicas y privadas, para poder aclarar dudas o acreditar documentación en las audiencias siendo así dinámicas y no mecánicas como lo son ahora. Con la finalidad de no vulnerar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad personal.

Segunda: Que, antes de solicitar esta medida gravosa apliquen primero el test de proporcionalidad de forma estricta, para comprobar que la medida a utilizar no presente ninguna arbitrariedad, que se utilicen otras medidas accesorias de semejante eficacia que tiene nuestro ordenamiento jurídico vigente, como la vigilancia electrónica, comparecencia simple o restringida, detención domiciliaria, la limitación de salida o la suspensión de derechos, entre otras, asimismo primero partan del principio de la presunción de inocencia, y no aplicar indiscriminadamente esta medida.

Tercera: para finalizar se recomienda a los Jueces, la debida motivación de las resoluciones o fallos judiciales con el propósito de al momento de evaluar los medios de prueba, hechos, circunstancias, normas nacionales e internacionales, también valore no solo las hipótesis positivas, también las hipótesis negativas, para luego contrastarlas, que al momento de resolver pueda expresar las razones o justificaciones objetivas que le llevaron a tomar tal decisión, se rechaza las resoluciones que no son debidamente motivadas, exhortamos enérgicamente a las autoridades tomar medidas correctivas, hasta pecuniarias de tal omisión, porque esto genera el descredito a la sociedad y además porque vulnera derechos fundamentales.

VII. REFERENCIAS

FUENTES PRIMARIAS

Entrevistados

Martell, W. (2017). Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Carabayllo.

Rojas, G. (2017). Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Carabayllo.

Chafloque, W. (2017). Fiscal Adjunto Provisional de la Fiscalía Provincial de Transito y Seguridad Vial de Lima Norte

Ramírez, F. (2017). Asistente de Función Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial de Carabayllo.

Fernández, J. (2017). Abogado Penalista Independiente.

Lujan, S. (2017). Abogado Penalista Independiente.

Cervera, R. (2017). Abogado Penalista Independiente.

Peceros, L. (2017). Abogado Penalista Independiente.

FUENTES SECUNDARIAS

Fuentes temáticas

Alonso Benito, L. (1995). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis.

Arias, F. (1997). *El Proyecto de Investigacion*. Caracas - Venezuela: Editorial Episteme.

Asencio Mellado, J. (2004). *la regulacion de la prision preventiva en el codigo procesal penal del peru. (en) Cubas villanueva, victor y otros. El nuevo proceso penal estudios fundamentales*.

Asencio Mellado, J. M. (1986). *Tesis doctoral La prision provisional*. Obtenido de file:///C:/Users/NENA/Downloads/Asencio%20Mellado,%20Jos%C3%A9%20Mar%C3%ADa.01%20(2).pdf

Barney, G., & Strauss, A. (1967). *The dicoverly of grounded theory: strategies for qualitative research*. New York: Aldine Publishing Company.

- Bedon Moreno, M. (julio de 2010). *Tesis de grado para optar el título de abogada: Medidas cautelares: especial referencia a la prision preventiva en la legislacion penal ecuatoriana*. Obtenido de <http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/149/1/T-UTC-0076.pdf>
- Behar Rivero, D. (2008). *Metodologia de la investigacion*. Shalom 2008.
- Bisquerra Alzina, R. (1998). *Modelos de orientación e intervención psicopedagógica*. Madrid: Ciss Praxis.
- Castillo Ticona, O. (2015). *Tesis para obtener el título profesional de abogado. Revision periodica de oficio de la prision preventiva y el derecho a la libertad*. Recuperado el 2016, de http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1825/1/RE_DERECHO_REVISION.PERIODICA.OFICIO.PRISION.PREVENTIVA.DERECHO.LIBERTAD_TESIS.pdf
- Circular de prision preventiva. (2011). *Resolucion administrativa N° 325-2011-p-p-j*. Obtenido de <http://www.cerjusc.org.pe/adjuntos/notas/prensa20120226195327.pdf>
- Claus Roxin. (2003). *Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, revisada por Julio B.J. Maier. Primera traducción al castellano de la 25ª edición alemana*. Editores del Puerto (Argentina).
- Constitucion Politica. (2016). *La constitucion comentada: analisis articulo por articulo*. Lima: Gaceta.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (21 de Noviembre de 2007). *Sentencia Jurisprudencial Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador*. Obtenido de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf
- Corte Superior de Justicia de Lima. (2014). *Expediente Nro. 8132-2014. Pagina 3, 4, 57 y 65*. Lima.
- Cunza, Z. B. (2009). *Teoría del Estado*. Lima: Fondo Editorial de la UIGV.
- Daniels et al. (2011). *Metodología de la Investigación Jurídica*. Xalapa - Mexico: Servicios Editoriales Xalapa.

- Defensoria del Pueblo. (Octubre de 2011). *Informe N° 154-2011/dp*. Obtenido de <http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-154-FINAL.pdf>
- Del Rio Labarthe, G. (2009). *Derecho PUCP*.
- Domínguez, J. (2015). *Manual de Metodología de la Investigación Científica*. Chimbote - Perú: Imprenta Editora Grafica Real S.A.C.
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (01 de Julio de 2002). Obtenido de [http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)
- Fernandez Postigo, J. (2013). *Tesis doctotal la correcta interpretacion y aplicacion de las medidas cautelares personales; la detencion preventiva*. Obtenido de <http://eprints.uanl.mx/3390/1/1080256817.pdf>
- Gaceta Juridica. (2015). *La constitucion comentada analisis articulo por articulo tomo III*. Lima: Gaceta Juridica S.A.
- Garcia Caverro, P. (2006). Las medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal peruano. *Revista de Derecho, Universidad de Piura*.
- Hernández, Fernadez y Baptista. (2014). *Metodologia de la Investigacion* (6ta. Ed. ed.). México: Edamsa Impresiones S.A.
- Informe de la Comisión Interamericana de derechos humanos. *Los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas*. Recuperado el 20 de Octubre de 2016, de <https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf>
- informe de la comision interamericana de derechos humanos CIDH. (30 de Diciembre de 2013). *El uso de la prision preventiva en las americas*. Recuperado el 27 de Octubre de 2016, de <file:///C:/Users/NENA/Desktop/ADERECHO%202016/TESIS%20MARIA%20ELENA/INFORME%20POR%20CIDH%20E%20ILANUD%20PRISI%C3%93N%20PREVENTIVA.pdf>
- Instituto Nacional Penitenciario INPE. (Febrero de 2015). *Informe estadistico penitenciario*. Obtenido de http://www.inpe.gob.pe/pdf/febrero_15.pdf
- José Gregorio Hernández, L. H. (Enero de 2011). SEMINARIO: GENERACIÓN DE TEORÍA FUNDAMENTADA. Zulia: Universidad de Zulia. Obtenido de <http://www.eduneg.net/generaciondeteoria/files/INFORME-TEORIA-FUNDAMENTADA.pdf>

- Llobet J. (2009). La prision preventiva y la presuncion de inocencia segun los organos de proteccion de los derechos humanos del sistema americano. *IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.*(24), 114-148.
- Lopez Paredes, C. (2011). *Estudio juridico del peligro de fuga en la legislacion procesal guatemalteca*. Obtenido de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_9342.pdf
- Loza Avalos, C. (febrero de 2013). *la prision preventiva frente a la presuncion de inocencia*. Obtenido de http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20151008_02.pdf
- Mellado, J. (18 de Junio de 2009). *La regulacion de la prision preventiva en el codigo procesal penal del peru. En el Portal del Istituto de Ciencia Procesal*. Obtenido de: <http://www.incipp.org.pe/media/uploads/documentos/regulacionprisionpreventiva.pdf>
- Mir Puig, S. (2011). *Bases constitucionales del derecho penal*. Madrid: Iustel.
- Monge Navarro, R. (2012). *Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho*. Obtenido de http://ijj.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t12-prision_preventiva_y_principio_de_presuncion_de_inocencia.pdf
- Montero Aroca, J. (2016). *Derecho Jurisdiccional III*.
- Muñoz, F. (2010). *Derecho Penal. Parte Especial*. Valencia - España.: Editorial Tirant Lo Blanch.
- Neyra Flores, J. A. (2010). *Manual del nuevo proceso penal & de litigacion oral*. Lima: Moreno S.A.
- Ore Guardia, A. (2016). *Derecho procesal penal peruano. Analisis y comentarios al codigo procesal civil*. Lima: Gaceta Juridica.
- Perez Lopez, J. (01 de Abril de 2014). *El peligro procesal como presupuesto de la medida coercitiva personal de prision preventiva*. Obtenido de [file:///C:/Users/NENA/Downloads/DialnetIPeligroProcesalComoPresupuestoDeLaMedidaCoerciti-5472565%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/NENA/Downloads/DialnetIPeligroProcesalComoPresupuestoDeLaMedidaCoerciti-5472565%20(6).pdf)

- Ramírez Atehortúa, F., & Zwerg Villegas, A. (2012). Metodología de la investigación: más que una receta. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 91-111.
- Real Academia Española. (2004). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de <http://dle.rae.es/?id=UCpprON>
- Reategui, J. (2014). *Manual de Derecho. Penal Parte Especial*. Lima - Peru: Pacífico Editores SAC.
- Rosas Yataco, J. (2003). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Lima: Grijley.
- Ruiz, P. (Septiembre de 2015). La prisión preventiva: un tratamiento convencional y constitucional. (l. p. 2015, Ed.) *Instituto pacífico actualidad Penal*, 15.
- Salas Beteta, C. (2011). *El proceso penal común*. Lima: Gaceta jurídica S.A.
- San Martín Castro, C. (2015). *Derecho procesal penal lecciones*. Lima: Instituto peruano de criminología y ciencias penales.
- Sanguine, O. (2003). *Prisión provisional y derechos fundamentales*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Sentencia Nro. 865/2015. (2015). *Tribunal Supremo en lo Penal de Villa Madrid*. Villa de Madrid.
- Sotomayor, R. T. (2015). *Cómo hacer un proyecto de investigación* (2.^a ed ed.). Bogotá: Alfaomega.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory*. Colombia: Universidad de Antioquia.
- Tafur Portilla, R., & Izaguirre Sotomayor, M. (2015). *Como hacer un proyecto de investigacion*. Lima: Alfaomega.
- Tamayo y Tamayo, M. (1994). *El proceso de investigación científica*. Mexico: Limusa.
- Tamayo y Tamayo, M. (2003). *El Proceso de Investigacion Cientifica*. México D.F.: Editorial Limusa S.A. de C.V.
- UCV. (2016). *Manual para la Elaboración del Proyecto de Investigación*. Lima: UCV Oficina de Investigación.
- Valderrama Mendoza, S. (2016). *Pasos para elaborar proyectos de investigacion científica*. Lima: San Marcos.

- Valdes Cruz, L., & Bedon Moreno, M. T. (Julio de 2010). *Medidas cautelares: especial referencia a la prision preventiva en la legislacion ecuatoriana*. Obtenido de Tesis de grado de la Universidad Tecnica de Cotopaxi: <http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/149/1/T-UTC-0076.pdf>
- Villavicencio, F. (2013). *Derecho Penal. Parte Genral*. Lima - Peru: Editorial Grijley.
- Villegas Paiva, E. A. (2016). *Limites a la detencion y prision preventiva*. Lima: Dialogo con la jurisprudencia Gaceta Juridica S.A.

ANEXOS

ANEXO 01: Matriz de consistencia

Nombre del estudiante: María Elena Ordinola Rodríguez.

Facultad/escuela: Derecho

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	“Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016”
PROBLEMA GENERAL	¿Cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016?
PROBLEMA ESPECIFICOS	1.- ¿De qué manera los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? 2.- ¿De qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva?
SUPUESTO GENERAL	Los criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva, resultan ser muy estereotipadas, flexibles, vulnerándose derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia.
SUPUESTOS ESPECIFICAS	1.- los criterios del Juez, no se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva. 2.- La manera cómo motivan los jueces las resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva resulta ser inadecuada, superflua, vulnerándose derechos

	fundamentales de los procesados.
OBJETIVO GENERAL	Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<p>1.- Examinar la manera en que se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.</p> <p>2.- Analizar la manera en que el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.</p>
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN	Investigación enfoque Cualitativo
DISEÑO DEL ESTUDIO	Teoría fundamentada
POBLACIÓN Y MUESTRA	Distrito Judicial de Lima Norte – Juzgado Penal de Turno

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES (Categorización en Cualitativo)

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS	Entrevista, Análisis de casos, Marco Normativo y Análisis Jurisprudencial
-------------------------------------	---

ANEXO 02: Instrumentos

ANEXO 2-A

Entrevista al Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Carabayllo William Manuel Martell Aguilar.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUIA DE ENTREVISTA

Título: "Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016"

Entrevistado/a: Willian Manuel Martell Aguilar

Cargo/profesión/grado académico: Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Carabayllo

Institución: Ministerio Público

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

Considero que los criterios que toma en cuenta el Juez, son los señalados en el código procesal penal de 2004, como son los arraigos, gravedad de la pena, del daño resarcible, sobre la conducta procesal del imputado ya sea antes o durante el proceso y la pertenencia del imputado a una organización criminal.

2.- ¿De los mencionados anteriormente, cuáles serían a su juicio los más relevantes al momento de evaluar el peligro de fuga para la determinar la prisión preventiva?

A mi punto de vista considero que criterios los más relevantes son los arraigos, mayor énfasis al momento de acreditar los el arraigo laboral, familiar.

Debido que a veces los jueces no se ponen de acuerdo en cuanto a los documentos o medios de prueba para acreditar este elemento, en el sentido de que para uno son más estrictos con el acervo documentario y para otros solo son documentos de mero trámite. Asimismo sobre la pertenencia del imputado a un organización criminal este es muy objetivo poder aplicar este criterio.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Examinar si los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

3.- ¿Para usted, que criterios extrapenales utiliza el juez al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

A mi parecer no considero que se deba evaluar criterios no normativizados en el sentido que el Juez, estaría incurriendo en prevaricato. Pero en la realidad del día a día muchas veces son influenciados por la presión mediática, como bien se sabe la prensa tiene mucho poder tanto así que es posible viciar su pronunciamiento y por presión mediática, podrían determinar que existe peligro de fuga señalando que no falta algún elemento del presupuesto del peligro de fuga para que se determine la prisión preventiva.

4.- ¿Desde su perspectiva considera usted, que los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique por qué?

Considero que si se adecuan al test de proporcionalidad, porque es necesario que el juez al momento de su valoración cuando tenga dos conflictos de intereses este debe priorizar la seguridad de los ciudadanos que propia la libertad de esta persona, por ejemplo en los casos de los padres que violan a sus menores hijas, a los imputados que cometen secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, ellos pues pueden atentar contra las víctimas y estarían en peligro los agraviados y la sociedad, considero que resulta idónea la medida de prisión preventiva.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar de qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

5.- ¿En su experiencia laboral considera que los jueces realizan una debida motivación en sus resoluciones al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique?

Considero que sí, pero algunas veces yo he tenido la oportunidad de poder apreciar que existan deficiencias con fallos a veces exagerados, pues considero que eso debe ser por lo que se está implementado en nuevo código procesal penal en Lima Norte, y que las audiencias son el vivo, y es por la premura del tiempo considero. Asimismo como derecho de cualquier ciudadano pues si se siente agraviado este puede acudir a cualquier instancia para pueda ser revisado su caso en caso advierta que no le favorezca.

Entrevistadora	Entrevistado/a Firma y sello
	 WILLIAM MANUEL MARTIN AGUIAR FISCAL PROVINCIAL TITULAR 2da. Fiscal Provincial Manu Chigayto Distrito Fiscal de Lima Norte

ANEXO 2-B:

Entrevista al Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Carabayllo, Gary Martin Rojas Auqui.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUIA DE ENTREVISTA

Título: "Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016"

Entrevistado/a: Gary Martin Rojas Auqui

Cargo/profesión/grado académico: Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Carabayllo

Institución: Ministerio Público

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

Considero que los criterios que toma en cuenta el Juez, en principio son todos los descritos en el artículo del 268 Y 269 son los señalados en el código procesal penal de 2004,

2.- ¿De los mencionados anteriormente, cuáles serían a su juicio los más relevantes al momento de evaluar el peligro de fuga para la determinar la prisión preventiva?

Considero que criterios los más relevantes son los arraigos, mayor énfasis al momento de acreditar el arraigo de domiciliario y familiar.

Porque considero que no existe arraigo el hecho de que una persona recién se ha mudado, vive sola, no tiene familia, es soltera, pues existe gran posibilidad que este se fugue, en cuanto al arraigo laboral, para acreditar ello es necesario con un certificado de trabajo o algún documento que acredite que labora para una empresa o que se dedica a una actividad.

La gravedad de la pena existe mayor probabilidad de fuga cuando el delito imputado es mayor de 4 años, asimismo sobre su conducta del imputado al oponer resistencia para su captura, que tiene antecedentes pues considero que son factores determinantes para que se conceda la prisión preventiva.

Pues existe mucha controversia para poder valorar este presupuesto pues como es un factor de discrecionalidad del Juez.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Examinar si los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

3.- ¿Para usted, que criterios extrapenales utiliza el juez al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

Considero que se deba evaluar las carencias sociales, la reincidencia y habitualidad del justiciable, su conducta para la reparación del daño, entre otros.

4.- ¿Desde su perspectiva considera usted, que los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique por qué?

Considero que los criterios del Juez, si se adecuan al test de proporcionalidad, si bien es cierto que toda medida de restricción de derechos debe ser idónea, necesaria y proporcional, pues esta se debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, frente a la libertad del procesado considero que la prisión preventiva es idónea disuadir un futuro atentado contra las víctimas. En especial a las víctimas de indemnidad sexual, feminicidio, en las organizaciones de tráfico ilícito de drogas entre otras.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar de qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

5.- ¿En su experiencia laboral considera que los jueces realizan una debida motivación en sus resoluciones al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique?

No necesariamente, los Jueces realizan una debida motivación en relación al presupuesto del peligro de fuga, en especial a la pena concommitada y los criterios periféricos de los arraigos, como también hay otros Jueces que en sus resoluciones no motivan, simplemente escuchan a las partes procesales y luego se pronuncia su fallo sin dar explicaciones de aquella conclusión final. Pues existiendo un clara vulneración de derechos fundamentales.

Entrevistadora	Entrevistado/a Firma y sello
	 <div data-bbox="941 560 1157 705"> <p>GARY MARTIN ROJAS AUQUI FISCAL PROVINCIAL TITULAR 3ra. Fiscalía Provincial Norte de Carabaylla Distrito Fiscal de Lima Norte</p> </div>

ANEXO 2-C:

Entrevista al Fiscal Adjunto Provisional de la Fiscalía Provincial de Transito y Seguridad Vial de Lima Norte, Ronald Nicolás Chafloque Chávez.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUIA DE ENTREVISTA

Título: "Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016"

Entrevistado/a: Ronald Nicolás Chafloque Chávez

Cargo/profesión/grado académico: Fiscal Adjunto Provincial

Institución: Ministerio Público

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

En mi opinión los criterios que toman en cuenta los Jueces, son los señalados en la norma Penal, como los arraigos familiar, domicilio y familiar como la gravedad de la pena y la pertenencia a una organización delictiva, y la conducta procesal del imputado al momento del hecho o después del mismo. Estos criterios deben ser sólidos, objetivos al momento de su valoración.

2.- ¿De los mencionados anteriormente, cuáles serían a su juicio los más relevantes al momento de evaluar el peligro de fuga para la determinar la prisión preventiva?

En mi opinión los más relevantes son los arraigos, de domiciliario, familiar y laboral. Necesariamente el arraigo laboral se debe acreditar con un certificado de trabajo o algún documento que acredite que efectivamente labora para una empresa o que se dedica a una determinada actividad. Asimismo los lazos familiares son importantes como que tenga hijos, padres, y que estos dependan del imputado para poder confirmar que existe calidad de arraigo. Con respecto a la conducta del procesado los jueces, valoran si el procesado tiene antecedentes, si es que actualmente tiene otros procesos, como se ha comportado en ellos. Considero que lo principal es hacer una valoración en conjunto para determinar la existencia de un peligro de fuga del procesado.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Examinar si los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

3.- ¿Para usted, que criterios extrapenales utiliza el juez al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

De acuerdo a mi experiencia, lo mas usual es la presión mediática que si puede influenciar en la decisión de cualquier órgano jurisdiccional, por temor quizá a ser removidos de su cargo, a quedarse sin trabajo, o ser objeto de atención mediática que puede afectar a sus este y sus familiares.

4.- ¿Desde su perspectiva considera usted, que los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique por qué?

Considero que los criterios del Juez, si se adecuan al test de proporcionalidad, en el ámbito Penal, ahora constitucional considero que es muy cuestionable. Porque los jueces en su mayoría van a priorizar la seguridad de la sociedad que el que se ponga en riesgo debido a que el imputado, ha perjudicado bienes jurídicos protegidos, al momento de desplegar su conducta delictiva, pues no quepa duda que este pueda intentar atentar nuevamente para su propio beneficio por ejemplo que quede en libertad este puede coaccionar, amenazar a las víctimas, para que se desistan de la denuncia o incluso desaparecer todo tipo de indicio en la investigación es por ello que considero los criterios del Juez, son adecuados al test de proporcionalidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar de qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

5.- ¿En su experiencia laboral considera que los jueces realizan una debida motivación en sus resoluciones al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique?

Bueno hace un año se viene implementando progresivamente el CPP, de 2004, en el Distrito Judicial de Lima Norte, considero que los Jueces, en su mayoría realizan una debida motivación acerca de la valoración del presupuesto del peligro de fuga.

Entrevistadora	Entrevistado/a Firma y sello
	  <p>RONALDO NICOLAS CHAPLODDE CRUZ Fiscal Regional Provincial Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial Distrito Fiscal de Lima Norte</p>

ANEXO 2-D:

Entrevista al Asistente de Función Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial de Carabayllo, Fredy Ramírez Bailón.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUIA DE ENTREVISTA

Título: "Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016"

Entrevistado/a: Fredy Ramírez Bailón

Cargo/profesión/grado académico: Asistente de Función Fiscal

Institución: Ministerio Público

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

En mi opinión los criterios que toma en cuenta el Juez por lo general son los arraigos familiar, domicilio y familiar, la gravedad de la pena

2.- ¿De los mencionados anteriormente, cuáles serían a su juicio los más relevantes al momento de evaluar el peligro de fuga para la determinar la prisión preventiva?

En mi opinión los más relevantes son los arraigos, de domiciliario, familiar y laboral. Los criterios del juez respecto al arraigo domiciliario, consideran que muchas veces no se toman en cuenta la edad de los imputados ya que la mayoría oscilan entre los 18 a 25 años, el arraigo familiar, existe controversia de aquellos jóvenes en especial solteros, que es complicado acreditar este arraigo. Otro criterio es la gravedad de la pena, consideran que este presupuesto es de evaluación automática que si la pena a imponer supera los 04 años entonces es un criterio para determinar el riesgo de fuga del imputado. Hay muchos juicios de valor por parte de los magistrados lamentablemente este presupuesto es relativo, muy subjetivo que cabe la posibilidad de imponer medidas como la prisión preventiva de forma arbitraria.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Examinar si los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

3.- ¿Para usted, que criterios extrapenales utiliza el juez al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

Considero que no utilizan los Jueces, criterios extrapenales.

4.- ¿Desde su perspectiva considera usted, que los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique por qué?

Considero que los criterios del Juez, si se adecuan al test de proporcionalidad, porque si de evaluar dos derechos contrapuestos pues tiene que elegir la de mayor relevancia para seguridad del mismo, pues la prisión preventiva es la medida mas adecuada para el cumplimiento de dicha finalidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar de qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

5.- ¿En su experiencia laboral considera que los jueces realizan una debida motivación en sus resoluciones al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique?

Considero que los Jueces en su mayoría hacen una debida motivación, adecuándose a principios, normas, jurisprudencia, con observancia de normas del Derecho Comparado.

Entrevistadora	Entrevistado/a Firma y sello
	 FREDY RAMIREZ BAILÓN Asistente en Función Fiscal 3º F.P.M. Cerabaillo Distrito Judicial de Lima Norte

ANEXO 2-E:

Entrevista al Abogado Penalista Independiente, Juan Fernández Pacherre.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUIA DE ENTREVISTA

Título: "Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016"

Entrevistado/a: Juan Fernández Pacherre

Cargo/profesión/grado académico: Abogado

Institución: Independiente

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

En mi opinión los criterios que toman en cuenta los Jueces, son los señalados en la norma Penal, como los arraigos familiar, domicilio y familiar como la gravedad de la pena y la conducta procesal del imputado durante el proceso o entro proceso, la gravedad del daño.

2.- ¿De los mencionados anteriormente, cuáles serían a su juicio los más relevantes al momento de evaluar el peligro de fuga para la determinar la prisión preventiva?

Considero que los más relevantes son los arraigos, de domiciliario, familiar y laboral. Este último es muy discutible hoy en día porque lo Jueces, no se ponen en un consenso, ya que utilizan criterios estereotipados, subjetivos, que para poder acreditar pues es necesario que el certificado de trabajo que sea con firmas legalizadas por un Notaria Publico, a mi parecer es absurdo porque cuando la defensa desea ejercer la defensa muchas veces se hace en menos de 24 horas pues resulta que no se adecua al plazo razonable para adjuntar esa calidad de medios probatorios, pues son criterios no normativos que lo suman como valoración que a comparación con el Ministerio Publico ellos si tienen la carpeta en su poder y pueden recabar con mayor facilidad el acervo documentario pues no existe igualdad de armas. Asimismo arraigo de domicilio, es cuestionable en las personas que alquilan, pues si hace un año se trasladó de un lugar a otro, que en su mayoría quizá por temas de familia, trabajo, pues se cuestiona para decir que no tiene arraigo y que es una persona inestable que no tiene domicilio fijo, pues estos criterios no se adecuan a derecho y se vulnera el derecho de presunción de inocencia y la libertad de los imputados.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Examinar si los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

3.- ¿Para usted, que criterios extrapenales utiliza el juez al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

Me remito a lo dicho anteriormente que los Jueces, hacen juicios de valoración de

los documentos como si estos fueran peritos, además en ninguna parte del código penal dice que para acreditar los arraigos, deban ser constancias con firma legalizadas son criterios estereotipados, a sabiendas de la cultura de informalidad que se vive el país, hace poco salió un reporte en cuarto poder que menciona que 70 a 80 % de la población reina la informalidad, siendo así esta realidad pues lo solicitado por los Jueces, no se adecuan a nuestra realidad.

4.- ¿Desde su perspectiva considera usted, que los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique por qué?

Como mencione anteriormente los criterios del Juez, resultan ser desproporcionales, ilegítimos por las consideraciones anteriormente descritas.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar de qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

5.- ¿En su experiencia laboral considera que los jueces realizan una debida motivación en sus resoluciones al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique?

Para mi punto de vista los Jueces, no realizan una debida motivación acerca del presupuesto del peligro de fuga, porque ellos al momento de decidir prácticamente se remiten a lo que menciona en la carpeta fiscal, solamente aceptando las pruebas de cargo y descartando las pruebas de descargo, pues considero que esa es mala práctica aquí en Lima Norte.

100-100-100

Entrevistadora	Entrevistado/a Firma y sello
	

ANEXO 2-F:

Entrevista al Abogado Penalista Independiente; Segundo Lujan Mendoza.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUIA DE ENTREVISTA

Título: "Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016"

Entrevistado/a: Segundo Gabriel Lujan Mendoza

Cargo/profesión/grado académico: Abogado

Institución: Independiente

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

En mi opinión los criterios que toman en cuenta los Jueces, de Lima Norte por lo general son los señalados en la norma Penal, como los arraigos familiar, domicilio y familiar como la gravedad de la pena, la gravedad de la pena, la conducta procesal del imputado durante el proceso o entro proceso.

2.- ¿De los mencionados anteriormente, cuáles serían a su juicio los más relevantes al momento de evaluar el peligro de fuga para la determinar la prisión preventiva?

Considero que los más relevantes son los arraigos, de domiciliario, familiar y laboral. Es cuestionable la evaluación de estos tres elementos en el sentido que no existen criterios objetivos, claros, concretos, pues se basan en meras conjeturaciones a pesar que ya existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la Circular de prisión preventiva entre otros. Que la práctica pues resulta muchas deficiencias en su valoraciones de este presupuesto.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Examinar si los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

3.- ¿Para usted, que criterios extrapenales utiliza el juez al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

Considero la calidad moral del procesado, la corrupción y la presión mediática, que influyen en el juicio de valor del juez para que se pronuncia sobre la existencia del peligro de fuga.

4.- ¿Desde su perspectiva considera usted, que los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique por qué?

Considero que no porque existen muchos juicios de valor de los magistrados, que algunos valoran la reincidencia y la habitualidad, otros sobre la gravedad del delito y el daño a la víctima, pero más es la presión mediática que muchas veces puede influenciar y por temor a ser denunciados o sacados de sus puestos de trabajo acceden a esa prerrogativas por una alarma social y pues terminar imputándoles la prisión preventiva.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar de qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

5.- ¿En su experiencia laboral considera que los jueces realizan una debida motivación en sus resoluciones al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique?

Para mi punto de vista los Jueces, no realizan una debida motivación acerca del presupuesto del peligro de fuga, porque no se encuentran bien capacitados, no existe un consenso acerca de la valoración de este presupuesto en Lima Norte.

Entrevistadora	Entrevistado/a Firma y sello
	 SEGUNDO G. LÓPEZ MENDOZA ABOGADO CALN 1323

ANEXO 2-G:

Entrevista al Abogado Penalista Independiente; Ex-Fiscal; Ricardo Francisco Cervera Lengua.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUIA DE ENTREVISTA

Título: "Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016"

Entrevistado/a: Ricardo Cervera Lengua

Cargo/profesión/grado académico: Abogado

Institución: Independiente

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

En mi opinión los criterios que toman en cuenta los Jueces, los arraigos familiar, domicilio y familiar, la gravedad de la pena y la gravedad del daño causado, la conducta procesal del imputado durante el proceso o entro proceso y la pertenencia del imputado a una organización criminal.

2.- ¿De los mencionados anteriormente, cuáles serían a su juicio los más relevantes al momento de evaluar el peligro de fuga para la determinar la prisión preventiva?

Considero que los más relevantes son los arraigos, de domiciliario, familiar y laboral. En Lima Norte, con las nuevas implementaciones sobre la entrada en vigencia del nuevo código procesal penal, existen una disyuntiva o variedades de criterios para la valoración de los mismos muchas veces los Jueces, no tienen en cuenta sobre la Edad cronológica de los procesados, así mismo la mayoría serian solteros por lo tanto algunos alquilan o viven con sus padres, pues a pesar de las declaraciones juradas de domicilio que manifiestan tener para el Juez, no es suficiente, pues porque no tienen descendencia o alquilan existe peligro de fuga, otro problema es acreditar el arraigo laboral no hay criterios tasados para unos exigen documentos certificados o con firmas legalizadas si no están estas pues las rechazan en todo su extremo, en cambio otros no se hacen problema en aceptarlos, son criterios flexibles, mecánicos. Acerca de la gravedad de la pena su aplicación es automática por el solo hecho que la pena futura sea mayor a 4 años, del daño resarcible aquí considero que se debe desterrar este presupuesto ya que la Constitución, dice que no hay cárcel por deudas, en cambio se ingresa una figura civil a la prisión preventiva, de la pertenencia a una organización criminal es igual de automática su valoración desterrando el principio de presunción de inocencia. Se hace urgente un cambio de actitud de nuestras autoridades porque si se sigue así tendríamos que pasar toda nuestra vida creando cárceles, que los jueces tienen criterios inquisidores aun.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Examinar si los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

3.- ¿Para usted, que criterios extrapenales utiliza el juez al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

Los criterios extrapenales considero que serían el nivel social, y la prensa o presión mediática.

4.- ¿Desde su perspectiva considera usted, que los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique por qué?

Considero que los criterios de juez, no se adecuan al test de proporcionalidad, porque ellos hacen valoraciones subjetivas no objetivas y siempre se remiten a lo dicho en el parte policial o lo de la carpeta fiscal, pues las audiencias son tan mecanizadas que ante un observación de prueba de descargo simplemente dicen que eso se ver en transcurrir del proceso y de forma arbitraria llegan a determinar la existencia del peligro de fuga. Muchas veces no hacen la valoración del test de proporcionalidad entre la medida más gravosa y la ,libertad del imputado por meras presunciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar de qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

5.- ¿En su experiencia laboral considera que los jueces realizan una debida motivación en sus resoluciones al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique?

Considero que cuando se va a determinar la restricción de un derecho básico o fundamental como es la libertad personal. Entonces esta debe estar revestida de una debida motivación con la finalidad de dar a conocer sobre las razones que le llevo al Juez, a determinar tal decisión, resulta contradictoria en la práctica judicial, advirtiéndose una carencia de una debida motivación en relación a los autos de prisión preventiva que muchas veces lo hacen en remisión a lo que indica la carpeta fiscal, y no lo fundamentan en base a criterios concretos u objetivos.

Entrevistadora	Entrevistado/a Firma y sello
	 DR. RICARDO F. CERVERA LENGUA ABOGADO C.A.L. 17102

ANEXO 2-H:

Entrevista al Abogado Penalista Independiente; Luis Alfredo Peceros Quesada.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUIA DE ENTREVISTA

Título: "Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016"

Entrevistado/a: Luis Alfredo Peceros Quesada

Cargo/profesión/grado académico: Abogado

Institución: Independiente

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

En mi opinión los criterios que toman en cuenta los Jueces, de Lima Norte por lo general son los señalados los arraigos familiar, domicilio y familiar como la gravedad de la pena, entre otros. De los que se establece en la norma Penal.

2.- ¿De los mencionados anteriormente, cuáles serían a su juicio los más relevantes al momento de evaluar el peligro de fuga para la determinar la prisión preventiva?

Considero que los más relevantes son los arraigos, de domiciliario, familiar y laboral. Existe mucha controversia la evaluación de estos tres elementos, en el sentido que no existen criterios objetivos, claros, concretos, pues se basan en meras conjeturaciones ya se por la edad del procesado, por su estado civil especialmente en los solteros, de los que alquilan, de los que trabajan de forma eventual o independientes, ya que en nuestro país existe mucha informalidad, y de los que son formales el tiempo para recabar los documentos más aún si la judicatura requiere de documentos legalizados, es complicado que el representante legal tenga que salir de su oficina o enviar a un tercero para firmar estos documentos y en la audiencia se cuestione las firmas si tiene poderes suficientes o no, la verdad son muy subjetivos estos criterios, estereotipados.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Examinar si los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

3.- ¿Para usted, que criterios extrapenales utiliza el juez al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

Considero la calidad moral del procesado, y la presión mediática, que influyen en el juicio de valor del juez para que se pronuncia sobre la existencia del peligro de fuga.

4.- ¿Desde su perspectiva considera usted, que los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique por qué?

Considero que no se adecuan los criterios del Juez, por lo mencionado anteriormente.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar de qué manera el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

5.- ¿En su experiencia laboral considera que los jueces realizan una debida motivación en sus resoluciones al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique?

Para mi punto de vista los Jueces, no realizan una debida motivación acerca del presupuesto del peligro de fuga, porque hay muchos criterios a la hora de valorar este presupuesto, por ello es necesario una evaluación caso por caso, y no se limite a lo dicho por el Fiscal, sino también que escuche y valore los medios de prueba presentados por la defensa técnica y que utilicen criterios de proporcionalidad y estos pues después sean expresos mediante una resolución judicial, para conocer los juicios de su conclusión final.

Entrevistadora	Entrevistado/a Firma y sello
	 

ANEXO 2-I: Guía de Entrevista



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Título: “Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016”

Entrevistado/a:

Cargo/profesión/grado académico:

Institución:

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

2.- ¿De los mencionados anteriormente, ¿cuáles serían a su juicio los más relevantes al momento de evaluar el peligro de fuga para la determinar la prisión preventiva?

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Examinar la manera en que se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva.

3.- ¿Para usted, que criterios extrapenales utiliza el juez al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva?

4.- ¿Desde su perspectiva considera usted, que los criterios del Juez, se adecuan al test de proporcionalidad al momento de evaluar el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar la manera en que el Juez, motiva sus resoluciones sobre el presupuesto del peligro de fuga al momento de determinar la prisión preventiva.

5.- ¿En su experiencia laboral considera que los jueces realizan una debida motivación en sus resoluciones al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva? ¿Explique?

ANEXO 2-J:

Guía de Análisis Jurisprudencial Casación N° 631-2015-Arequipa



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Título: “Los criterios del juez al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva del juzgado penal de turno permanente - Lima Norte - 2016”

Problema general:

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

Supuesto general:

Los criterios que utilizan los jueces para determinar el presupuesto del peligro de fuga en las audiencias de prisión preventiva del juzgado penal de turno permanente - Lima Norte – 2016, resultan ser criterios muy subjetivos, flexibles, vulnerando derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia.

Identificación del objeto de Análisis

Jurisprudencias: Sala penal transitoria Casación N° 626-2013 MOQUEGUA

Procedencia: Perú

Tema: Derecho Penal.

Jurisprudencias: Sala penal transitoria Casación N° 631-2015 AREQUIPA

Procedencia: Perú

Tema: Derecho Penal.

Tipificación:

A / **CUARTO.** Que, ahora bien, el peligro procesal (*periculum in mora*) es el elemento más importante para valorar en un auto de prisión preventiva. Éste tiene un carácter subjetivo, pero objetivado legalmente a través de diversos criterios de carácter meramente enumerativos, y, por ende, reconoce un margen de discrecionalidad en los jueces. La Ley, como se sabe, establece la presencia de dos peligrosismos: fuga –que es el paradigma del *periculum libertatis*–, y obstaculización (artículos 268º, apartado 1, literal c y 269º-270º del Nuevo Código Procesal Penal).

↑ El peligro de fuga hace referencia a la probabilidad de que el imputado en caso de permanecer en libertad, vaya a sustraerse a la acción de la justicia, evitando ser juzgado o bien se vaya a sustraer de la pena que se le podría imponer [LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER: *Proceso Penal Comentado*, cuarta edición, Editorial Jurídica Continental, San José, dos mil nueve, página trescientos ochenta y ocho].

W Dentro de los criterios que el Juez debe tener en cuenta para determinar el peligro de fuga están aquellos vinculados a la situación personal, familiar y económica del imputado, conocido como ‘arraigo’ –que tiene esencialmente un carácter objetivo, y ni puede afirmarse con criterios abstractos, sino debe analizarse conforme al caso concreto– (artículo 269º del Nuevo Código Procesal Penal). El arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. El arraigo tiene tres dimensiones: 1) La posesión. 2) el arraigo familiar y 3) el arraigo laboral. El primero se refiere a la existencia de un domicilio conocido o de bienes propios situados dentro del ámbito de alcance de la justicia. El segundo se circunscribe al lugar de residencia de aquellas personas que tienen lazos familiares con el imputado. El tercero se expresa en la capacidad de subsistencia del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país. Todo ello, visto en su conjunto, acreditaría el establecimiento de una persona en un determinado lugar. Es claro que estas circunstancias de arraigo, de presentarse, desincentivan la fuga del imputado [DEL RÍO LABARTHE, GONZALO: *La Prisión Preventiva en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. En: *Temas penales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Anuario de Derecho Penal, Lima, dos mil ocho, página noventa y siete].

P

RS

SEXTO. Que es cierto que los alcances del arraigo en el país también pueden valorarse desde los lazos familiares que el imputado mantiene en el exterior, más aún si es extranjero, situación que le permitiría abandonar el país y refugiarse en su localidad de origen cuando advierte riesgo para sí. Sin embargo, esta situación tiene que ser apreciada caso por caso.

Si se tiene en cuenta que *prima facie* está consolidado el arraigo del imputado, pues vive en el país, tiene estatus de residente, su familia nuclear está con él y su centro de labores es una empresa radicada en el Perú, sólo podría afirmarse la persistencia del riesgo de fuga si se toma en consideración otros datos que permitan concluir razonablemente que se alejaría de la justicia peruana para evitar su procesamiento, enjuiciamiento y, en su caso, la condena correspondiente.

Estos factores concurrentes deben ser evaluados con suma atención desde que un acercamiento genérico al problema, asumiendo un peligro de fuga por la sola condición de extranjero del imputado, importaría un acto discriminatorio por razón de la nacionalidad. En efecto, cuando se acredite indubitadamente que un procesado extranjero tiene arraigo en el país, ello permite entender un riesgo menor de peligro de fuga, salvo que conste razonablemente otros datos de ese orden que vislumbren un sólido riesgo fundado de fuga.

SÉPTIMO. Que un criterio tomado en cuenta para determinar el peligro de fuga fue el intenso movimiento migratorio del imputado Ríos Sánchez, aunque se trata de viajes por motivos laborales, vinculados a su labor profesional, de corto alcance y de regreso inmediato al Perú. Al respecto, la

ANEXO 2-K:

Guía de Análisis Normativo - Circular sobre prisión preventiva, resolución administrativa N° 325-2011-P-PJ.

Identificación del objeto de Análisis

Norma: CIRCULAR SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA, RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 325-2011-P-PJ

Procedencia: PERU

Tema: Derecho Penal

TERCERO.- Que el Código Procesal Penal ofrece criterios específicos para analizar el riesgo de fuga y el peligro de obstaculización probatoria. La normativa procesal penal establece -a través del desarrollo de los artículos 269 y 270 del Código Procesal Penal- una guía -sin duda flexible o abierta- para que la jurisdicción pueda utilizar índices específicos para justificar la imposición de una medida procesal tan grave como la prisión preventiva. Tales lineamientos tienen como objetivo evitar la justificación de la misma sobre la base de resoluciones estereotipadas o con una escasa motivación en el ámbito nuclear del 'peligrosismo procesal'.

Sin embargo, debe quedar claro que estos postulados normativos no tienen naturaleza taxativa. El Juez, obviamente, puede incorporar en su análisis otros criterios que justifiquen o no aconsejen la aplicación de la prisión preventiva (el estado de salud del procesado, por ejemplo), siempre que respeten la Constitución, así como la proporcionalidad y la razonabilidad de la decisión. Además, ha de tomar en cuenta que los requisitos exigidos al momento inicial de su adopción no son necesariamente los mismos que deben exigirse con posterioridad para decretar su mantenimiento.

El factor temporal, en orden a las razones justificativas de la restricción de la libertad personal, adquiere singular relevancia. Así, en la fase inicial del proceso, la necesidad de atender a los fines de la prisión preventiva y los escasos datos de que en esos primeros momentos podría disponerse pueden justificar que dicha medida coercitiva se acuerde apreciando únicamente el tipo de delito y la gravedad de la pena que conlleve, pues de tales elementos puede colegirse los riesgos de fuga y/o de entorpecimiento. Empero, con el transcurso del tiempo las exigencias son más intensas; han de valorarse de forma más individualizada las circunstancias personales del imputado y los del caso concreto que se hayan conocido durante el proceso.

ANEXO 2-L:

Guía de Análisis de Casos - del Juzgado de Turno Permanente de Lima Norte.

Identificación del objeto de Análisis

Norma comparada: EXPEDIENTE DEL JUZGADO DE TUTNO PERMANENTE DE LIMA NORTE

Procedencia: PERU

Tema: Derecho Penal

Tipificación:

JUZGADO PENAL DE TURNO
EXPEDIENTE : 00854-2016-0-0901-JR-PE-00
JUEZ : FERNANDEZ LOPEZ GRACIELA (TURNO)
ESPECIALISTA : ARANGO ANDIA, RICARDO ALBERTO
IMPUTADO : MEDINA CADILLO, RUBEN ALBERTO
DELITO : TENTATIVA
DELITO : SOPLIN ONCOY, JUAN ALEJANDRO
DELITO : TENTATIVA
DELITO : MEDINA CADILLO, RUBEN ALBERTO
DELITO : ROBO AGRAVADO
DELITO : SOPLIN ONCOY, JUAN ALEJANDRO
DELITO : ROBO AGRAVADO
AGRAVIADO : ESPIRITU ROMERO, FIORELLA ALMENDRA

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE IMPUTACION DE CARGOS Y REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA

INTRODUCCION
En Independencia, siendo las **09.00am** del día **21.03.2016**, en la sala de Audiencias N° 10 de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, fue presente la señorita Juez Penal de Turno doctora **Graciela Mercedes Fernández López**, a fin de llevar a cabo **AUDIENCIA DE IMPUTACION DE CARGOS Y REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA**, solicitada por el despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Condevilla, en el proceso N° 854-2016 seguido a **Juan Alberto Soplin Oncoy y Rubén Albert Medina Cadillo** por la presunta comisión del delito **contra el patrimonio – Robo agravado en grado de tentativa** en agravio de **Fiorella Almendra Espíritu Gómero**.

Se deja constancia que la audiencia será registrada mediante audio, conforme así lo establece el inciso 2) del artículo 361° del Código Procesal Penal y el artículo 26° del Reglamento General de Audiencias.-

ACREDITACION
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: Dr. Teofilo Huaylla Muñoz
Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía Penal de Condevilla;
Domicilio Procesal: av. Eduardo de Habich 697 San Martín de Porres,
Casilla electrónica: 3253

PODER JUDICIAL

5.4.3 Tercer Presupuesto: PELIGRO DE FUGA o PELIGRO DE OBSTACULIZACION

5.4.3.1 Tenemos que la dirección domiciliar de SOPLIN ONCOY ha sido corroborado con la verificación domiciliar que obra a fojas 27, en la cual el personal policial al constituirse a dicho domicilio se encontró a la madre de éste quien manifestó que vive con el imputado, respecto a su arraigo familiar, si bien es cierto ha manifestado que vive con su madre y hermanos, podría ser admisible que solo viviría con su madre más no con sus hermanos porque no ha adjuntados sus documentos de identidad, respecto al arraigo laboral, la defensa ha señalado en esta audiencia hasta antes de su detención ha trabajado para la empresa MULTISERVICOS RIMAC S.A.C, tiene licencia de conducir, sin embargo, no ha presentado ninguna documentación, contrato que

108
ciento
ocho

corrobore ello, que haya realizado con dicha empresa, y su gerente sería J. Martín Manche Espinoza, solo existe un carnet, más no tendríamos en alta probabilidad certeza que estaría realizando trabajos para dicha empresa, a ello se suma que lo manifestado por la defensa se contradice con lo manifestado por su patrocinado en su declaración policial, en la que señaló "que actualmente me encuentro trabajando como mototaxi desde hace aproximadamente siete meses en un vehículo menor que le es alquilado por una señora de nombra CHABUCA, quién vive en el asentamiento humano ALTILLO, no recuerdo su dirección pero si su casa, a la misma que le pago por el alquiler la suma de S/.35.00 nuevos soles pagando también la cochera, percibiendo por dicha labor la suma de S/.40.00 nuevo soles...", pero en ningún momento, no ha proporcionado el nombre completo de la persona que le alquila la mototaxi, la defensa no ha adjuntado ningún contrato de alquiler aunque sea simple, no nos ha indicado donde guardaría la mototaxi que refiere, y solo indica que se encuentra afiliado a la empresa de transportes Públicos Multiservicios RIMAC, más no nos dice que se encontraría trabajando para dicha empresa, contradicciones que lleva a esta magistrada a no tener alta probabilidad de tener un trabajo conocido que satisfaga sus necesidades alimentarias, vestimenta, educación y otros que pueda tener, a ello se suma los elementos de convicción fundados y graves, de haber actuado mediante violencia, conforme se desprende del certificado médico practicado a la agraviada que obra de fojas 29 y lo sostenido por la agraviada que los dos sujetos utilizaron violencia, forcejearon y tiraron al suelo, nos lleva a concluir que el denunciado tiene un comportamiento agresivo y transgresor a las normas de convivencia social, no solo poniendo en peligro el patrimonio de la agraviada, sino también su integridad física y psíquica de la misma, aunado a ello que el denunciado al observar al personal de serenazgo trato de darse a la fuga, y dado la gravedad de la pena concordado con todos estos argumentos expositivos por ésta magistrada, por lo tanto este tercer presupuesto también se ha cumplido y se declara fundad En este acto la señorita juez

5.4 EN CUANTO AL IMPUTADO RUBEN ALBERTO MEDINA CADILLO

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

EXPEDIENTE : 04262-2016-0-0903-JR-PE-00
JUEZ : TP TORRES CUADROS VERONICA
ESPECIALISTA : SANTOS LEZAMA CERVITA
IMPUTADO : DAVID FERNANDEZ VASQUEZ
DELITO : CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL - ACTOS CONTRA EL PUDOR EN
MENOR DE EDAD
AGRAVIADO : R.S.Q.S.

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACION DE CARGOS Y REQUERIMIENTO DE PRISION
PREVENTIVA

I. INTRODUCCIÓN:

En Independencia, siendo las diez y veinte de la mañana del día primero de Noviembre del año dos mil dieciséis, en la Sala de Audiencias número nueve de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se da inicio a la presente Audiencia Privada de Presentación de Cargos y Requerimiento de prisión preventiva solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra, en la causa signada con el número 4262-2016, formalizada contra **DAVID FERNANDEZ VASQUEZ**, como presunto autor de delito contra La Libertad Sexual - Actos contra el pudor en menor de edad, en perjuicio de la menor de iniciales **R.S.Q.S.** La Audiencia es dirigida por la Señorita Juez **Verónica Torres Cuadros**, Juez a cargo del Juzgado de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte del 31 de octubre al 06 de noviembre. Se deja constancia que la presente audiencia se realizara conforme lo establece el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo 1206.

II. ACREDITACIÓN:

1. **MINISTERIO PÚBLICO:** OSCAR TEMPLE TEMPLE, Fiscal Provincial Mixto de Puente Piedra, con domicilio procesal, en la Calle César Vallejo N° 115 - Segundo Piso - Distrito de Puente Piedra, Casilla Electrónica N° 33436.
2. **DEFENSA TECNICA DE LA PARTE AGRAVIADA:** DR. WILDER EDUARDO CHAVEZ MERCADO identificado con Colegio de Abogados de Cajamarca N° 1181; con Casilla Electrónica N° 5784, con teléfono celular 944814639, domicilio procesal Jr. Los Claveles S/N - 1º Piso-Ofc. Víctimas - Ex Colegio Cervantes - Puente Piedra.
3. **PORTE AGRAVIADA:** GOTARDO QUICHCA HUAMANI, padre de la menor de iniciales **R.S.Q.S.**, con DNI N° 41386158, con domicilio AA.HH. Tiwinza Mz. B, Lote 6 - Distrito de Puente Piedra, con teléfono celular 988769816.
4. **DEFENSA TECNICA DEL PROCESADO:** DR. ALBERTO CAÑOTE USCAMAYTA, identificado con CAL 25046, Casilla electrónica 31344, domicilio procesal. Av. Carlos Izaguirre N° 216 - Independencia. Correo electrónico a.canote@hotmail.com. Numero de teléfono 999859303.

- III. **DENUNCIADO:** DAVID FERNANDEZ VASQUEZ, edad 64 años, con D.N.I. 07980990, estado civil casado, ocupación obrero, domicilio. Mz. Q lote 14-AA-HH Tiwinza - Puente Piedra.

SEXTO: Respecto al tercer presupuesto referido al peligro procesal, el cual comprende el peligro de fuga establecido en el artículo 269 del Código procesal penal y el peligro de obstaculización referido en el artículo 270 de la citada norma legal, el Ministerio Público, ha sustentado ambas vertientes. Respecto al Peligro de fuga, se debe determinar si existen elementos que permitan asegurar la presencia del imputado durante el decurso procesal, en tal sentido en cuanto al arraigo domiciliario, si bien el representante del Ministerio Público indica que la información de la ficha de RENIEC, no sería coincidente con la dirección señalada por el imputado; respecto al domicilio indicado por éste se han efectuado diversas actas: de hallazgo y registro domiciliario y otra de Inspección Técnica Policial, así como de constatación domiciliaria, en este sentido el arraigo domiciliario del imputado estaría acreditado, máxime si los mismos padres de la agraviada indican que éste es su vecino, cercanía que en verdad no es beneficiosa para la víctima y la no obstaculización probatoria que requiere el proceso. En cuanto a su actividad laboral, la defensa técnica ha señalado que éste al prestar su manifestación ha indicado laborar como albañil y pintor de casas, en forma independiente y que en todo caso muchas personas actualmente están en la misma condición, por lo que no puede acreditar; y si bien la defensa técnica alega ello, durante la audiencia no ha precisado cuáles han sido sus últimos trabajos realizados, no ha señalado los nombres de las personas para quienes habría laborado o por lo menos haber presentado una constancia o haber llevado a audiencia a estas personas a efectos de sustentar su actividad laboral, no habiéndose indicado en la Inspección técnica realizada a su domicilio que se haya encontrado herramientas utilizadas para albañilería o pintado de casas, por lo que el arraigo laboral no estaría acreditado. Respecto, al arraigo familiar, es de precisar que el imputado al prestar su manifestación policial señaló vivir solo en su domicilio, no habiendo mencionado a ningún familiar que viviera cerca o con el cual mantuviera contacto, o que lo visitara o cuya subsistencia dependiera de su persona, pudiendo por tanto cambiar de lugar de domicilio sin inconveniente alguno; y si bien ha indicado que tiene una hija y dos nietos no se ha presentado ningún documento que acredite ello. Por otro lado, se tiene que la pena a imponerse en caso de encontrarse responsable superaría los cuatro años de pena privativa, lo cual hace presumir lógicamente que estando en libertad trataría de eludir la acción de la justicia, existiendo por tanto peligro de fuga. Respecto al Peligro de Obstaculización, sustentado por el representante del Ministerio Público, se tiene que el procesado es vecino de la agraviada y también vive cerca de la testigo – menor de edad, ofrecida por el representante del Ministerio Público, por lo que podría influenciar con su sola presencia a la agraviada y testigo a efectos que varíen en sus declaraciones, sobre todo la que ha sido citada en calidad de testigo si se pusiere en libertad al imputado, obstaculizando la actividad probatoria, máxime cuando es

PODER JUDICIAL

VERÓNICA TORRES CUA

ABOGADO DE PARTIDO GENERAL VA. 1914
CONTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

19

PODER JUDICIAL

CERVITA MAXIMILIANO SANTOS LEZAMA

ABOGADO DE PARTIDO GENERAL VA. 1914
CONTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

requerida la presencia del encausado para la evaluación psicológica que se ha ordenado se le practique por peritos que asignará la división médico legal, por lo que la suscrita considera factible que existe la probabilidad que se obstaculice la investigación en caso de encontrarse en libertad el imputado. Por lo que al considerar que estando en libertad trataría de eludir la acción de justicia y obstaculizar la actividad probatoria, esta judicatura resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva al concurrir copulativamente los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

DECISION:

Que, estando a los argumentos anotados por este Despacho en la Audiencia Pública y concurriendo los presupuestos establecidos en el artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal, este Despacho **RESUELVE: DECLARAR FUNDADO** el Requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA presentado por la Primera Fiscalía Mixta de Puente Piedra, contra el procesado **DAVID FERNANDEZ VASQUEZ**, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra La Libertad Sexual - Actos contra el Pudor en Menor de Edad, en agravio de menor de iniciales **R.S.Q.S. (05)**; **DISPONIENDO** EL INTERNAMIENTO del procesado **DAVID FERNANDEZ VASQUEZ**, en Cárcel Pública, que la autoridad penitenciaria, disponga, para cuyo efecto se contabilizara la duración de la prisión preventiva desde la data de su intervención.

AUTO DE PRISION PREVENTIVA

RESOLUCIÓN NÚMERO:
Independencia, 06 de julio del
dos mil dieciséis.-

VISTOS Y OÍDOS en Audiencia Pública Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la restricción de un derecho fundamental sólo tiene lugar cuando fuera indispensable, en la medida y por el tiempo, estrictamente necesario y sólo podrá ser restringido en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ellas.

SEGUNDO: Que, conforme lo establece el artículo 268° del Código Procesal Penal, prevé los presupuestos materiales que deben tenerse en cuenta a fin de determinar la procedencia o no del requerimiento de prisión preventiva; en ese sentido, se señala como primer presupuesto, la existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo.

TERCERO: Conforme a ello, y en relación a los argumentos expuestos por los sujetos procesales presentes en esta audiencia pública, así como a los actuados obrantes en autos, resulta preponderante para los fines de la vinculación; en primer orden, la manifestación de la agraviada, quien al narrar los hechos sufridos en su agravio refiere que el día 4 de julio del presente año a las 22:00 horas, aproximadamente, y cuando bajaba de una combi en el paradero 19, cuando se desplazaba por la zona, en ese momento se le acercó un individuo a quien conoce como "Ruso" quien de frente se le vino con sus dos manos y le jaló fuertemente su cartera-morral negro de tela hacia abajo provocando su caída al suelo, y es en el suelo donde le pateó en sus rodillas y piernas, y al poner sus manos pidiendo que no le haga daño, por lo que sus manos también están hinchadas al haberse cubierto con ellas, por lo que tuvo que soltar su cartera y en su presencia abrió su morral, sustrajo los dos celulares, y un monedero conteniendo la suma de 600 soles y luego de ello le aventó su mochila y se fue corriendo ante lo cual en compañía de su madre se dirigió a la Comisaría a pedir apoyo policial. Estando a dicha declaración, se advierte: **A)** que la agraviada Flor Elizabeth Suárez Jara, no solo sindicó plenamente al ahora imputado como el autor del evento punible, sino que además lo reconoce por ser una persona que vive por la misma zona que ella; **B)** que la agraviada pensó en un primer momento que el imputado no le haría nada, pues lo conoce por ser de la zona; esta circunstancia es corroborado por el propio imputado, quien además refiere: "...Que sí la conozco, ya que vive a la vuelta de mi casa y su madre se llama Martha...". Por tanto, la sindicación efectuado por la agraviada, respecto de la identidad de la persona que le agredió el día de los hechos, resultaría acertada pues conoce a su agresor; **C)** ahora bien el imputado, a referido que tuvo un cierto percance con la madre de la agraviada a quien conoce como Martha, por el hecho de que un día se puso a orinar en frente de su casa; deslizándose la posibilidad de una cierta enemistad y que la imputación estaría dotada de subjetividad; al respecto, este

12

PODER JUDICIAL
ALBERTO CORAL FERRER
ABOGADO TITULAR
FISCALÍA GENERAL DEL MP - MOQUECHILLA
COMISIÓN DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

PODER JUDICIAL
JUAN SIMÓN NARAGIO VÁSQUEZ
SECRETARIO JUDICIAL
TERCER JUZGADO PENAL - RES. CONDENVILLA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

QUINTO.- En relación al Tercer presupuesto material, referente al peligro de procesal, sea en su vertiente de peligro de fuga o de obstaculización de averiguación de la verdad; se tiene que el artículo 269° del Código Procesal Penal prevé los indicadores que deben tenerse en cuenta para determinar la existencia del denominado peligro de fuga, entre ellos, verificar si cuenta con arraigo en el país, el que a su vez se determina no sólo por contar con un domicilio conocido, sino otros elementos tales como el arraigo laboral que no es otra cosa que negocios o trabajos conocidos, que desempeñaría el imputado, el arraigo familiar, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto.

En el caso de autos, en Ministerio Público no ha cuestionado que el imputado posea un domicilio y un arraigo familiar, el mismo que habría sido constatado conforme se advierte en el acta de verificación de fojas 13, donde se deja constancia que el imputado tendría su domicilio en la Calle 17, número 140, Túpac Amaru - Independencia.

Ahora en relación al arraigo laboral del imputado, en este acto la defensa ha presentado una constancia de trabajo, la misma que habría sido expedida por la persona de Fidel Lázaro Camacho, donde se deja constancia que el ahora imputado vendría dedicándose como trabajador haciendo empastes y trabajos varios, apreciándose un sello que pertenecería a su emitente bajo la denominación "Industria del Calzado"; al respecto, se puede advertir; A) que en primer orden dicha constancia de trabajo ha sido expedida por su emitente de nombre Fidel Lázaro Camacho, sin embargo, no se ha acreditado de modo alguno que dicho emisor tenga potestades para expedir esta clase de documentales; B) tampoco se ha acreditado la existencia legal o personería jurídica de la empresa que emite la constancia, a fin de causar certeza sobre la validez de la misma, y C) la firma que contiene dicha constancia no se encuentra certificada por notario o funcionario

PODER JUDICIAL
CARLOS ALBERTO CORAL FERREIRO
JUEZ TITULAR
TERCER JUZGADO PENAL S.M.P. - M.D. CONDORILLA
CALLE 17 N° 140 - TUPAC AMARU

PODER JUDICIAL
JUAN SIMÓN NARAGIO VÁSQUEZ
SECRETARIO JUDICIAL
TERCER JUZGADO PENAL - M.D. CONDORILLA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA - LAMAYORTE

14

Ministerio 68

...publico competente, que dé la existencia de la persona que otorgó la misma; y D) no ha presentado el documento idóneo como el contrato laboral respectivo, o las boletas o formas de pago del haber del imputado, que permite a este despacho presumir que efectivamente, este viene realizando actividades lícitas, y que por el contrario la misma no ha sido expedida de favor; ahora bien, el principio de veracidad administrativa que invoca la defensa y que es atendible en los procedimientos administrativos, no debe confundirse con la veracidad o certeza de la información relacionada a procesos judiciales, las mismas que son susceptibles de ser valoradas y apreciadas conforme al prudente arbitrio del órgano jurisdiccional; E) por tanto, para este despacho esta simple constancia presentada por la defensa del imputado, no causa de modo alguno certeza sobre la existencia de un sólido arraigo laboral del imputado; más aún cuando el propio imputado, desliza la comisión de actos delictivos al señalar: "...Que, no me explico, además yo he estado sentado en la loza deportiva que queda en la esquina de la casa de la agraviada y no he visto nada, además yo voy a hacer eso en mi barrio y con mis vecinos que viven allí". Por tanto, no existe un sólido arraigo laboral.

Estando a lo expuesto, si bien el imputado posee un domicilio conocido y un arraigo familiar ello no es suficiente para establecer que existe un sólido arraigo del imputado en el país; pues conforme lo establece la Resolución Administrativa N° 325-2011-P/PJ que señala que lo que debe valorarse es la solidez o la calidad del arraigo, desprendiéndose de autos que no se encuentra acreditada su actividad laboral y debiéndose tener en cuenta la gravedad de la pena que se espera alcanzar; así se tiene que el presente delito contempla una pena conminada de no menor de doce ni mayor de veinte años, por lo que la pena es alta o elevada, por lo que ello generaría un fundado temor de fuga o ocultamientos a los fines proceso.

Sumado a ello, conforme lo ha expuesto, el Ministerio Público el imputado viene siendo sometido a otro proceso de investigación que se encuentra judicializada ante el Cuarto Juzgado Penal de Lima Norte por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, que si bien es cierto, no existe una sentencia definitiva, ello es un indicador que el imputado, vendría dedicándose a actividades ilícitas que tornan en inestable el arraigo invocado por su defensa técnica.

Por otro lado, también debe merecer especial consideración el hecho de una probable perturbación de los órganos de prueba, toda vez que siendo el imputado vecino de la agraviada quienes se conocen desde hace años, cabe la posibilidad de una perturbación de dicho órgano de prueba, por lo que este Despacho debe procurar que se proteja la actuación de la misma, **lo que en su conjunto permite prever y establecer que también concurre el tercer presupuesto exigido por la norma adjetiva.**

SEXTO.- Estando a las argumentos expresados, para este Despacho concurren por ahora los presupuestos materiales exigidos por la norma adjetiva, por lo que virtud del Principio de Proporcionalidad, para este Despacho, la medida coercitiva solicitada por el Ministerio Público resulta ser la más idónea o adecuada pues limitándose la libertad del imputado, se evita la posibilidad de una reiteración

PODER JUDICIAL
CARLOS ALBERTO CORAL FERREYRO
JUEZ TITULAR
TERCER JUZGADO PENAL - N.º 3 - LIMA NOROCCIDENTAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PODER JUDICIAL
JUAN SIMÓN NARAGIO VÁSQUEZ
SECRETARIO JUDICIAL
TERCER JUZGADO PENAL - N.º 3 - LIMA NOROCCIDENTAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

15

...lectiva y asegura los fines del proceso; resulta ser de necesidad pues respecto de otras medidas coercitivas la de prisión preventiva es la que precisamente por ahora garantizaría los fines de la instrucción; y proporcional pues conforme a la naturaleza y gravedad del delito que se habría cometido, y al carácter pluriofensivo del mismo, la medida a imponerse sería acorde a dichos lineamientos; por lo que deberá ampararse la pretensión del representante del Ministerio Público de dictarse prisión preventiva.

POR LOS FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS SE RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte contra **JORGE SIARHEI RÍOS LORENZO** como presunto autor del delito **CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO AGRAVADO**, en agravio de **FLOR ELIZABETH SUÁREZ ARA**.

En este acto, el Juez insta a las partes procesales a que arriben a un acuerdo de terminación anticipada, conforme lo establece el artículo 77-8 del Código Penal.

El señor fiscal ha solicitado seis meses de prisión preventiva exponiendo el sustento para solicitar dicho plazo; no contradiciendo la defensa del imputado.

Estando a lo expuestos, se tiene que efectivamente, **resulta amparable** la solicitud del Ministerio Público y por el plazo de 06 meses dado que estando a la realidad de los órganos jurisdiccionales del juzgado de reo en cárcel de este Corte Superior al hecho de que en la Corte de Lima Norte las causas penales como la presente aún se vienen tramitando bajo los cánones del proceso ordinario de carácter inquisitivo cuya juzgamiento incluso es realizado por una Sala Superior distinta al de primera instancia, torna en razonable el plazo solicitado por el Ministerio Público; por lo que se fija el plazo de la prisión preventiva en **SEIS MESES**, contados a partir de la detención policial, dándose por notificados en este acto formal, al representante del Ministerio Público, a la defensa del imputados y a la parte civil; disponiéndose su internamiento en cárcel pública, oficiándose con tal fin.

SEGUNDO: SE DISPONE EL INTERNAMIENTO del imputado en cárcel pública, oficiándose como corresponde.


TERCERO: Téngase por notificados en este acto a los sujetos procesales presentes al haberse dictado resolución íntegra y en forma oral.

NOTIFICACIÓN

JUEZ: NOTIFICA a las partes presentes y procede a preguntarles si se encuentran conforme con la resolución emitida.

MINISTERIO PÚBLICO	: CONFORME.
ABOGADO	: INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN
PARTE CIVIL	: CONFORME.


CARLOS ALBERTO CORA FERREYRO
JUEZ TITULAR
TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL - LIMA NOROCCIDENTAL


PODER JUDICIAL
JUAN SANCHEZ NARAGÓ VÁSQUEZ
SECRETARIO JUDICIAL
TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL - LIMA NOROCCIDENTAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NOROCCIDENTAL

16

ANEXO 03:

Validación de Instrumentos



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Santisteban Llontop, Pedro
 1.2. Cargo e institución donde labora: Fiscal Militar Policial- Ministerio de Defensa
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento: María Elena Ordóñez Rodríguez

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.							*						
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.													
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.													
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.													
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, 28 de junio del 2017

PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 ABOGADO
 CAL 17951
 DOCTOR EN DERECHO

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 69803311, Telf. 983.278.657



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Santisteban Llontop Pedro
 1.2. Cargo e institución donde labora: Fiscal Militar, Prolud - Ministerio de Defensa
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía Análisis de casos
 1.4. Autor(A) de Instrumento: María Elena Ordinoza Rodríguez

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											✓		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											✓		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.											✓		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.									✓		✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD


- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

 Lima, 28 de junio del 2017


 PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 ABOGADO
 CAL 17951
 DOCTOR EN DERECHO

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

 DNI No. 0980331 Telf. 980278657



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Santisteban Llontop, Pedro
 1.2. Cargo e institución donde labora: Fiscal Militar Regional - Ministerio de Defensa
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Jurisprudencial
 1.4. Autor(A) de Instrumento: María Elena Ordóñez Rodríguez

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											/		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											/		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											/		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											/		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											/		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.											/		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											/		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.											/		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.											/		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											/		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

X

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

 Lima, 28 de junio del 2017


 PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 Abogado
 CAL 17951
 DOCTOR EN DERECHO

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

 DNI No. 09803111 / Telf. 983278657



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Santesteban Llontop, Pedro
 1.2. Cargo e institución donde labora: Fiscal Militar, Fiscalía - Ministerio de Defensa
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Normativo
 1.4. Autor(A) de Instrumento: María Elena Ordóñez Rodríguez

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											/		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											/		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											/		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											/		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											/		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.											/		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											/		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.											/		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.											/		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											/		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

 Lima, 28 de junio del 2017


 PEDRO SANTESTEBAN LLONTOP
 ABOGADO
 CAL 17951
 DOCTOR EN DERECHO

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

 DNI No. 0980331 Telf. 983278657



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: WENZEL RIVERA ELISEO SEGUNDO
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ENTREVISTA
 1.4. Autor(A) de Instrumento: MARIA SIENA ORDINO LA RODRIGUEZ

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

II. ASPECTOS DE VALUACIÓN														
CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.							*					✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 28 DE ENERO del 2017

 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
DNI No. 09940210 Telf. 992303480



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: WENZEL MIRANDA ELISEO SEGUNDO
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ANÁLISIS DE CASO
 1.4. Autor(A) de Instrumento: MARIA ELINA ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

SI

95 %

Lima, 28 DE JUNIO del 2017

 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
DNI No. 09940210 Telf. 992303460



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: WENZEL MIRANDA GILSO SEGUNDO
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUIA DE ANALISIS JURISPRUDENCIAL
 1.4. Autor(A) de Instrumento: MARIA ELENA ORDANOLA RODRIGUEZ

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

 Lima, 28 DE JUNIO del 2017

as al
 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

 DNI No. 09940210 Telf. 992303480



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: WENTZEL MIRANDA ELISEO SEGUNDO
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ANÁLISIS NORMATIVO
 1.4. Autor(A) de Instrumento: MARIA ELENA ORDÓÑEZ / ADEQUET

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

ASPECTOS DE VALORACIÓN														
CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.							*					✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.									✓			✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 28 DE JUNIO del 2017


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09940219 Telf. 992303480



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Morales Cauti, Guisseppi Paul
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuiza de entregable
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Maria Elena Ordinola Rodriguez

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 28 de junio del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09634461 Telf.: 992386899

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Morgles Cauti, Guisseppi Paul
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis de Casos
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Maria Elena Ordinola Rodríguez

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

☒ SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 28 de junio del 2017

FIRMA DEL EXPERTO-INFORMANTE

DNI No. 98634463 Telf. 992328819



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Morales Cauti, Guiseppe Paul
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Jurisprudencial
 1.4. Autor(A) de Instrumento: María Elena Ordóñez Pedraza

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.							*						✓
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													✓
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													✓
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													✓
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													✓
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.													✓
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													✓
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.													✓
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.													✓
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													✓

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

SI

95 %

Lima, 28 de junio del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 0963444 Telf.: 992386819



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Morales Cauti, Giuseppe Paul
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Normativo
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Maria Elena Ordóñez Rodríguez

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SÍ

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 28 de junio del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 69634466 ref. 912386819



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUIA DE ENTREVISTA

Título: "Criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte.2016"

Entrevistado/a: Luis Alfredo Peceros Quesada

Cargo/profesión/grado académico: Abogado

Institución: Independiente

OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los criterios del Juez, al evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016.

1.- ¿En su opinión, que criterios cree usted, que toma en cuenta el Juez, al momento de evaluar el presupuesto del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima Norte en el 2016?

En mi opinión los criterios que toman en cuenta los Jueces, de Lima Norte por lo general son los señalados los arraigos familiar, domicilio y familiar como la gravedad de la pena, entre otros. De los que se establece en la norma Penal.

